

**ELITES LOCALES, GRUPOS ARMADOS Y EMPRESA: LA MINERÍA DEL  
FERRONÍQUEL EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA.**

**ALEXANDRA MILENA BERNAL PARDO**

Tesis de grado de la Maestría en Ciencia Política

Directora: Angelika Rettberg

Universidad de los Andes  
Departamento de Ciencia Política  
Facultad de Ciencias Sociales  
Julio, 2009

## Índice

<b>I.</b>	<b>Introducción.....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Planteamiento del problema.....</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>Marco Teórico.....</b>	<b>7</b>
<b>IV.</b>	<b>Montelíbano: contexto económico y político.....</b>	<b>12</b>
	<i>Caracterización del conflicto armado regional .....</i>	<i>15</i>
	<i>Impacto de la economía ilegal en el municipio.....</i>	<i>21</i>
	<i>La clase política regional.....</i>	<i>23</i>
	<i>Elecciones.....</i>	<i>27</i>
<b>V.</b>	<b>El ferroníquel en la discusión sobre recursos y conflicto.....</b>	<b>29</b>
	<i>Factores explicativos en la relación recurso y conflicto: geografía, Fuerza Pública y comunidad.....</i>	<i>31</i>
	<i>Responsabilidad Social Empresarial.....</i>	<i>34</i>
<b>VI.</b>	<b>Conclusiones y recomendaciones .....</b>	<b>36</b>
	<i>Recomendaciones de política pública.....</i>	<i>38</i>
	<b>Bibliografía.....</b>	<b>40</b>
	<b>Anexo 1.....</b>	<b>43</b>
	<b>Anexo 2.....</b>	<b>52</b>
	<b>Anexo 3.....</b>	<b>55</b>

## I. Introducción

El ferroníquel es una aleación de níquel y hierro (aproximadamente 35% del primero y 65% del segundo). Este mineral es producido en Colombia por el complejo minero Cerro Matoso S.A. –CMSA-, ubicado en el municipio de Montelíbano en el departamento de Córdoba y hace parte de las exportaciones tradicionales colombianas junto al petróleo, el café y el carbón.

Estos productos, así como las empresas que los producen han inspirado análisis a profundidad desde diferentes disciplinas. No sólo se les ha evaluado desde el punto de vista técnico o desde el ambiental sino que han sido objeto de exploraciones desde la historia, la economía, la ciencia política y la administración, entre otras.

A diferencia de las aproximaciones sobre carbón, café y petróleo, el estudio de la minería del níquel en Colombia se caracteriza en su mayoría por aproximaciones desde la ingeniería. Otras disciplinas se han interesado en este recurso minero más allá de sus procesos y se han centrado en temas como su carácter de economía enclave<sup>1</sup> y la relación de la empresa con los stakeholders<sup>2</sup>. Sin embargo, estas aproximaciones no son comparables en cantidad y variedad con los disponibles sobre otros recursos agrícolas y mineros producidos en el país.

Adicionalmente es posible encontrar una amplia producción de textos e investigaciones de CMSA como parte de su evaluación anual especialmente en el tema de Responsabilidad Social Empresarial. Este esfuerzo se enmarca en los reportes de la compañía a su casa matriz, la multinacional anglo-australiana BHPBilliton.

El presente trabajo busca contribuir a la comprensión de la minería del níquel en Colombia específicamente al entendimiento sobre la relación entre minería y conflicto armado, sobre la manera en qué la economía legal se relaciona con el conflicto armado regional. Esta aproximación cobra sentido al observar que el entorno en el cual se sitúa el yacimiento es una zona con dinámicas de conflicto armado históricamente complejas.

---

<sup>1</sup> TEJADA DE LA OSSA. Humberto. *Cerro Matoso: enclave o polo de desarrollo*. Bogotá: Uniandes, 1987.

<sup>2</sup> DAVILA L. DE GUEVARA. José Camilo y otros (et. al). *Cerro Matoso SA.: sostenibilidad de una empresa en un entorno turbulento, 1970-2003*. Bogotá: Uniandes, Facultad de Administración, c2006.

## I. Planteamiento del problema

En el departamento de Córdoba, especialmente en el municipio de Montelíbano, la existencia de actores armados ilegales no está relacionada directamente con la economía minera del níquel. Sin embargo, la economía legal aparece como incentivo de permanencia de dichos actores en tanto éstos logran apropiarse de las ganancias derivadas del recurso vía sus nexos con la clase política dominante.

El caso del ferroníquel<sup>3</sup>, a diferencia del de otros recursos del sector extractivo, como el carbón y el petróleo, en los que el aprovechamiento de la economía legal por parte de los grupos armados ilegales combina mecanismos directos -extorsiones, secuestros, sabotajes al proceso- e indirectos -apropiación de rentas derivadas de la actividad minera-, la relación entre la extracción de níquel en Colombia y las dinámicas de conflicto regionales ha estado mediada principalmente por tres factores: la coexistencia de la economía legal y la ilegal en los municipios de influencia del mineral, especialmente en Montelíbano; la compleja relación entre las élites locales y los actores armados al margen de la ley; y la alianza existente entre la empresa, la Fuerza Pública y la comunidad en un lugar geográfico con características particulares. En medio de este escenario, el ferroníquel comparte con los demás recursos mineros la posibilidad de aprovechamiento de ingresos generados por la economía legal, por parte de actores armados ilegales y de la clase política regional.

Estudiar el caso de la minería del ferroníquel es relevante en el contexto colombiano, en el que el conflicto toma características particulares a nivel regional, y donde la permanencia y duración del conflicto ha mostrado involucrar incentivos económicos tanto ilegales como legales.

---

<sup>3</sup> La producción de Ferroníquel en lugar de níquel fue una decisión técnica. Su uso más importante es como insumo para las industrias que fabrican acero inoxidable, uso para el cual la combinación de níquel y hierro es favorable. Es utilizado también como catalizador en procesos de obtención de níquel de mayor concentración. Los principales consumidores de este producto son empresas ubicadas en Japón, España, Italia, Estados Unidos y China. El interés de los países consumidores de este mineral se deriva de sus diferentes propiedades -resistencia, dureza, ductibilidad, resistencia a la corrosión y conservación de la resistencia a temperaturas extremas-, y a la conservación de las mismas en aleaciones con otros metales. En general, el consumo de níquel depende del metal con que se le una. Así, en aleación con el acero, el níquel se utiliza para la fabricación de acero inoxidable, materiales para puentes, navíos y vigas, equipos de perforación petrolera; con el hierro es utilizado para la fabricación de equipos telefónicos; con el cobre se hacen materiales para plantas químicas, entre otros. Adicionalmente, el níquel es un material estratégico dada su demanda para usos militares. Ver MELO. Héctor. *La historia prohibida de Cerro Matoso*. Bogotá: Editorial Latina, 1973.

El presente trabajo está enmarcado en la investigación *¿Diferentes recursos, diferentes conflictos? Una exploración de la economía política del conflicto armado colombiano* que actualmente desarrolla la línea de investigación sobre Recursos, Región y Conflicto del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo –CRDI-, y que da cuenta de las dinámicas de conflicto local y su relación con la extracción de un recurso natural legal en una región específica.

Para el proyecto general, la variable independiente es la economía del recurso y la variable dependiente, las dinámicas de conflicto armado regional. La relación entre una y otra está mediada por una serie de variables intermedias que se refieren a aspectos económicos determinantes de acuerdo con la literatura sobre recursos y conflicto revisada: aspectos de mercado y laborales del producto en cuestión; otros relacionados con la presencia de grupos insurgentes en la zona y su influencia; la presencia del Estado; y finalmente la caracterización de las estructuras sociales adyacentes.

La investigación realizada es de carácter cualitativo, se ocupa de las variables identificadas como relevantes para la explicación de la incidencia de la producción de ferroníquel en el conflicto armado subregional. Para su desarrollo, además de la revisión bibliográfica sobre la historia social, política y económica de la región, se realizaron dos salidas de campo, y 30 entrevistas a profundidad con actores relevantes.

Para caracterizar la economía asociada al recurso se tiene en cuenta su nivel de producción, el comportamiento de los precios internacionales, las características de explotación, si se trata de un monopolio o una competencia, si se tienen cadenas de intermediación, y aspectos laborales como la procedencia de la mano de obra, su carácter estático o migratorio, la formalidad del vínculo laboral, el grado de capacitación necesario para participar en la actividad minera, el nivel de sindicalización, y la existencia o inexistencia de opciones de trabajo alternativas en la región.

En cuanto a la variable dependiente, se analiza el tipo de actor armado predominante en la zona, si se trata de una zona hegemónica o en disputa, el carácter de corredor

estratégico<sup>4</sup> y la presencia de cultivo ilícitos, como parte de una identificación de patrones históricos regionales respecto del conflicto armado interno.

Finalmente, se estudian variables intermedias entre las que se encuentra el grado de presencia institucional, la presencia militar en la zona, su historia, y características de comportamiento electoral a nivel municipal.

Sobre este caso particular, surge la inquietud sobre ¿por qué estudiar este mineral al abordar la economía política del conflicto armado colombiano? El interés inicial para su estudio es que se trata de un recurso natural exportable en un 99% cuyo peso en la economía nacional se observa en las exportaciones tradicionales colombianas junto al petróleo, el café y el carbón, y su comportamiento ha significado de manera escalonada grandes ingresos al país.

A nivel departamental puede resultar contraintuitivo el estudio de un recurso mineral en una región tradicionalmente conocida por su vocación agropecuaria, cuyo modelo de desarrollo se basa en la ganadería extensiva. Datos de la Federación Ganadera de Córdoba revelan que en 2005 el área destinada a la ganadería era de 1.640.000 hectáreas, el 65.5% del área total del departamento<sup>5</sup>. La razón es la importancia que ha ganado el sector extractivo en la economía regional. La actividad minera del departamento de Córdoba es jalonada por la extracción de ferroníquel y es una de las ramas de actividad económica que más aportes hace al PIB del departamento. Según la información disponible, en 2002 el sector minero participó con el 16,4% en el ingreso departamental, después de la rama de actividad que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que contribuyó en ese año con el 28,19%<sup>6</sup>.

En el nivel municipal la relevancia del estudio del ferroníquel es notable: este recurso constituye la principal fuente de ingresos del municipio de Montelíbano, así como la principal actividad legal generadora de empleo, y potencializadora de sectores como el

---

<sup>4</sup> Un corredor estratégico será entendido como un “espacio geográfico trazado sobre una topografía favorable constituyendo un dispositivo móvil con ventajas tácticas en la defensa, y estratégicas en la concentración y el despliegue de fuerzas, utilizado para la articulación entre bloques” de un actor armado ilegal. Esta definición fue suministrada en reunión con el Jefe de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas Colombianas, General Rocha, 2007.

<sup>5</sup> NEGRETE, Víctor. *Los obstáculos del desarrollo de Córdoba*. Centro de Estudios Sociales y Políticos Montería: Universidad del Sinú, 2007.

<sup>6</sup> Departamento Nacional de Planeación DNP. *Agenda Interna para la productividad y la competitividad. Documento regional. Córdoba*. Bogotá D.C, 2006. P. 53

comercio y los servicios, razón por la cual se puede decir que ésta es una economía recurso dependiente. Este hecho es aún más contundente al observar que a pesar de los esfuerzos de la compañía en generar opciones de trabajo distintas como generadoras de desarrollo para etapas post-explotación, hechos como la huelga de aproximadamente un mes de los trabajadores de la compañía a comienzos de 2008, así como la caída en los precios del níquel y la crisis económica mundial, entre otros, lleven a otras actividades económicas del municipio como el comercio, a quedar prácticamente paradas<sup>7</sup>.

Finalmente, el ferroníquel resulta llamativo cuando se tiene en cuenta que su extracción y transformación se realiza en una subregión caracterizada por dinámicas de conflicto complejas derivadas de la presencia de grupos armados ilegales diversos a lo largo de su historia; recientemente y por más de dos décadas bajo la influencia paramilitar; y por las particulares relaciones de la clase dirigente con estos grupos.

Este caso es relevante a luz de la literatura sobre la economía política de los conflictos armados en la cual los minerales aparecen como potenciadores del conflicto debido a sus características particulares de extracción y comercialización.

## **II. Marco Teórico**

Diferentes autores han explorado la relación entre recursos naturales y conflicto armado (Berdal & Malone 2000, Collier 2000, Keen 1998). Sin embargo, la importancia de factores económicos para entender cualquier conflicto particular siempre seguirá siendo motivo de debate al privilegiar motivaciones políticas, sociales o económicas en la explicación sobre los aspectos generadores de conflicto. Lo menos controvertido es la necesidad de incorporar la dimensión económica para entender mejor las causas y la persistencia de los conflictos armados. En general, se ha tratado de responder a la pregunta sobre cómo los aspectos económicos determinan el comportamiento de los actores involucrados en un conflicto, ocasionando una economía de guerra particular y unas dinámicas de conflicto distintas dependiendo del caso. Se ha determinado que incluso en situaciones en las

---

<sup>7</sup> “Pérdidas cercanas a \$200 mil millones dejó huelga de Cerro Matoso levantada este domingo”. En *Portafolio*. Marzo 2008

cuales los objetivos políticos y militares dan razones suficientes para entrar en conflicto, éstos parecen estar influenciados por motivaciones económicas<sup>8</sup>. Berdal & Malone<sup>9</sup> afirman que los expertos en conflicto están de acuerdo en la importancia de explorar el tema y enfatizan en la necesidad de dirigirse a mejorar el entendimiento sobre la economía política de las guerras civiles por medio del análisis de las agendas económicas de las facciones en competencia.

En este marco, es conocida en la literatura la idea de que la dependencia de un recurso primario de exportación es uno de los elementos cruciales para explicar el surgimiento de conflictos armados internos. Con base en el análisis estadístico de conflictos alrededor del mundo desde 1965, Paul Collier (2000)<sup>10</sup> encuentra que la agenda económica de los grupos armados ilegales es un punto central para entender por qué empiezan las guerras. Según este autor, los conflictos parecen ser causados por oportunidades económicas, más que por temas de justicia social.

Pero más allá de la perspectiva convencional de la competencia por recursos, el significado de éstos en las guerras se encuentra arraigado en las vulnerabilidades políticas y económicas de Estados recurso-dependientes. Según Philippe Le Billon (2001)<sup>11</sup>, los recursos tienen características históricas, geográficas y sociales que moldean los patrones de conflicto y violencia, lo que hace indispensable entender dichas características en el estudio de un caso específico. Además, tener en cuenta la historia antes del recurso, así como los modos específicos en que diferentes recursos definen resultados políticos y económicos.

Factores como la ubicación geográfica, la concentración y el modo de explotación de un recurso determinan su grado de "saqueabilidad", la medida en la que un grupo armado ilegal se puede apropiar de las utilidades generadas por la economía legal. Micheal Ross

---

<sup>8</sup> BERDAL, Mats. *et al.* Introduction. En: \_\_\_\_\_. Greed & Grievance, Economic agendas in civil wars. Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2000. p. 1-15.

<sup>9</sup> BERDAL y MALONE. *Ibid.*

<sup>10</sup> COLLIER, Paul. Doing well out of war: An economic perspective. En: BERDAL, M. and Malone, D (eds). Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. Colorado: Lynne Rienner, 2000.

<sup>11</sup> LE BILLON, Philippe. The Geopolitical Economy of Resource Wars. En: \_\_\_\_\_. Geopolitics of Resource Wars. Londres: Frank Cass, 2005. p. 1-28.



(2000)<sup>12</sup> encuentra evidencia que confirma la hipótesis sobre recursos saqueables como factor de prolongación de las guerras pues financian al lado más débil del conflicto. Le Billon (2001)<sup>13</sup> problematiza la aseveración de Ross afirmando que un ambiente rico en recursos puede ser propicio para financiar la rebelión, pero las oportunidades de los grupos armados sólo dependerán de las prácticas y la complicidad de los empresarios. Esta controversia académica refuerza el interés por entender la sostenibilidad de una empresa minera en un entorno turbulento<sup>14</sup>.

La literatura sobre recursos y conflicto también plantea que los beneficios de la guerra están fuertemente relacionados con la presencia y el acceso a recursos naturales en el área del conflicto. Esta relación es analizada en detalle por Indra De Soysa (2000)<sup>15</sup>, quien por medio de la utilización de métodos cuantitativos argumenta que la abundancia de recursos no renovables como los minerales tiene una relación significativa con el conflicto armado a diferencia de recursos renovables. De esta manera la existencia de recursos minerales puede funcionar como predictor de conflictos, lo que resalta la utilidad del estudio de la minería del ferrocarril.

De otro lado, en la literatura sobre la saqueabilidad de la riqueza generada por el sector extractivo se encuentra que ésta depende de las instituciones de extracción. Según lo encontrado por Richard Snyder (2006)<sup>16</sup> es posible identificar cuatro modos de extracción posibles: 1) la extracción privada, en la que actores económicos privados tienen el control exclusivo de las rentas generadas por los recursos, sin regulación y sin impuestos; 2) En contraste, el tipo de extracción pública es el caso en el que los gobernantes tienen el monopolio del proceso de extracción y el control total de los ingresos generados por el recurso; 3) Como forma intermedia se encuentra la extracción compartida que se refiere a los casos de cooperación entre actores públicos y privados quienes comparten los ingresos de explotación de recursos; 4) Finalmente existe la posibilidad de no extracción,

---

<sup>12</sup> ROSS, Michael. Oil, Drugs and Diamonds: the Varying Roles of Natural Resource in Civil War. En: BALLENTINE, Karen y SHERMAN, Jake. The political economy of armed conflict: beyond Greed and Grievance. Boulder: Lynne Rienner, 2003. P. 47-72.

<sup>13</sup> LE BILLON. Op.Cit.

<sup>14</sup> DAVILA L. DE GUEVARA, José Camilo y otros. Cerro Matoso S.A.: Sostenibilidad de una empresa minera en un entorno turbulento. Bogotá: Publicaciones-Facultad de Administración, Universidad de los Andes, 2006.

<sup>15</sup> DE SOYSA, Indra. The resource curse: are civil wars driven by rapacity or capacity. En: BERDAL, M. and Malone, D (eds). Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. Colorado: Lynne Rienner, 2000.

<sup>16</sup> SNYDER, Richard. Does the lootable wealth breed disorder?: a political economy of extraction framework. En: Comparative Political Studies Volume 39 Number 8, Octubre 2006. P. 943-968.

caso en el cual los actores públicos son incapaces de lograr el control de la extracción por lo que intentan prevenir un tipo de extracción privada. Del análisis de los casos de Sierra Leona y Burma en contextos de dictadura militar, Snyder concluye que un tipo de extracción compartida genera más estabilidad que los otros casos, sin embargo, los cambios en este tipo de distribución del poder pueden generar problemas conducentes al conflicto.

La idea de que la abundancia de recursos naturales causa crecimiento de la pobreza e incide en la intensidad y duración de los conflictos ha sido abordada por diferentes autores (Collier 2000, Ross 2001, DiJohn 2002<sup>17</sup>, Le Billon 2003). La premisa básica del modelo del Estado rentista es que los líderes, confiando en los ingresos no ganados (en la forma de rentas minerales o ayudas internacionales) no desarrollan obligaciones recíprocas con los ciudadanos vía impuestos domésticos (De Soysa 2000).

Di John (2002) encuentra poco convincentes los hallazgos empíricos para sostener que la violencia política es mayor en economías pobres con abundancia de recursos, pues no parecen existir pruebas contundentes que demuestren que la abundancia de recursos minerales por sí sola genere violencia. Controvierte la idea propuesta desde la literatura sobre la economía política de los conflictos, sobre *la maldición de los recursos* que plantea que la abundancia de éstos causa bajo crecimiento y aumenta la intensidad, incidencia y duración del conflicto. Sobre lo que sí encuentra evidencia es sobre el hecho de que si ya existe conflicto, algunos tipos de recursos naturales podrían facilitar la prolongación de la guerra. Esto sugiere que es importante tener en cuenta las contingencias, secuencias de acción e interacciones de acción política en los casos estudiados ya que la naturaleza de los conflictos en economías ricas en recursos minerales existe con posterioridad a escenarios políticos.

Finalmente, en la literatura sobre los conflictos armados se argumenta que los países en desarrollo que son recurso-dependientes tienen indicadores sociales más bajos y sus estados tienden a ser más corruptos, inefectivos, autoritarios y tendientes a priorizar en sus gastos militares (Snyder 2006). Expertos afirman que estos problemas los padecen

---

<sup>17</sup> DIJOHN, Jonathan. Mineral Abundance and Violent Political Conflict: A Critical Assessment of the Rentier State Model. Crisis States Programme Working Paper Series No. 1, 2002. Londres: Development Studies Institute, LSE.

todos los países pobres y que la dependencia del recurso es simplemente un síntoma de subdesarrollo económico.

Cabe mencionar que las investigaciones de las que se derivan estas hipótesis y que guiarán la presente investigación, no contemplan las variaciones regionales que puedan darse al interior de los países.

Las aproximaciones sobre el caso colombiano han centrado la atención en la relación entre conflicto y cultivos ilícitos (Rangel 1998 y 2001, Ferro y Uribe 2002, Díaz y Sanchez 2004) argumentando que los grupos armados ilegales que operan en el país, en su mayoría, dependen para su sostenimiento de la economía ilegal del narcotráfico. Estas aproximaciones han sido de tipo nacional.

Recientemente se han realizado estudios que aunque no se centran en la relación entre recursos y conflicto, sí abordan el conflicto armado colombiano a nivel municipal. El estudio realizado por el Foro Nacional por Colombia, con el apoyo de la GTZ (Programa CERCA PAZ) y la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial RINDE, se aproxima a las dinámicas de conflicto armado subregional. La investigación denominada “territorio, conflicto y gestión pública”, que examina los casos de 18 municipios en diferentes lugares del territorio colombiano, analiza el impacto de actores armados a nivel municipal desde tres aspectos específicos: el control territorial, el control electoral y el control de la gestión. El trabajo de campo llevó a concluir que respecto al Control territorial predominan los intereses económicos de los grupos armados y se materializan en la forma de captura de rentas públicas, tráfico de drogas, concentración de la propiedad, monopolio de negocios, y participación en megaproyectos, para el logro de lo cual se hace uso del poder de las armas para la acumulación de capital “a sangre y fuego”; respecto al Control político-electoral, este aparece como puerta de entrada a la política local y a la gestión del municipio; En cuanto al control político se evidenció la generación de limitaciones en el ejercicio de la ciudadanía y del uso de canales democráticos, así como escasa participación y movilización. En este último punto se encuentran dos modalidades de presión por parte de los grupos armados ilegales: una modalidad externa que se refiere a la desestabilización del orden público, presión por contratos y por inversiones en territorios específicos, entre otros y que son comunes a municipios con presencia guerrillera; y una modalidad de acción ejercida “desde adentro” caracterizada por la captura de rentas, la búsqueda de protección, la determinación de los

finés de la inversión, la incidencia en la formulación de planes y de políticas públicas, aspectos comunes en municipios con predominio de presencia paramilitar y de otros actores<sup>18</sup>.

### III. Montelíbano: contexto económico y político

El municipio de Montelíbano es el tercero más extenso del departamento de Córdoba, con 1.899 Km<sup>2</sup> que equivalen al 7.6% de la extensión total del departamento. Se encuentra situado a 114 kilómetros al sur de Montería, la capital<sup>19</sup> y su población, en 2005, superaba los 78.161 habitantes<sup>20</sup>.

El departamento de Córdoba se divide en dos grandes regiones: la primera, incluye el norte y el centro, y comprende los valles de los ríos Sinú y San Jorge. En ella se concentran la mayoría de los municipios y se trata de tierras relativamente planas. La segunda corresponde a las subregiones del Alto Sinú y San Jorge, al sur del departamento, zonas montañosas con relieves pertenecientes a las Serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, prolongaciones de la cordillera Occidental. Allí se encuentra el Parque Natural de Paramillo, reserva natural donde nacen los ríos Sinú y San Jorge.

Montelíbano, por su forma, combina la geografía de estas dos regiones cordobesas. Al norte las tierras son primordialmente planas, al sur, montañosas. En el mapa no. 1 es posible observar la forma del municipio (en verde en la parte de inferior), forma que le da el río San Jorge, que lo parte en dos delimitando su extensión y separándolo de la del municipio vecino de Puerto Libertador.

---

<sup>18</sup> FORO NACIONAL POR COLOMBIA. *Territorio Conflicto y Gestión Pública. La influencia de los actores armados en las condiciones de vida de la población, la gobernabilidad y la democracia a local en Colombia*. Consultado en <http://foronacional.no-ip.org/varios/Seminario%20GTZ/1%20carpeta%20de%20prensas%20co-regida.pdf> (Diciembre, 2008) Gobernación de Córdoba. Consultado el 22 de septiembre de 2008 en <http://www.cordoba.gov.co/municipios.html>

<sup>20</sup> Datos del CENSO de 2005 realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

## Mapa No. 1

### División Política del Departamento de Córdoba



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.

Al nororiente del municipio se ubica Cerro Matoso S.A. Esta mina es el único yacimiento de níquel en el país, y por sus dimensiones es la principal fuente generadora de empleo e ingresos municipales y una de las más importantes a nivel departamental. Sin embargo,

dado que esta actividad es intensiva en capital y altamente tecnificada para su funcionamiento (ver Anexo 1), las oportunidades laborales son limitadas y requieren en la mayoría de los casos, personal altamente capacitado inexistente en la región y más aún en la subregión, razón por la cual sólo el 7% de los trabajadores son cordobeses.

Montelíbano se convirtió en un importante centro minero a mediados del siglo XX, incluso antes de convertirse en municipio en 1954<sup>21</sup>. Desde entonces se generó un proceso de poblamiento acelerado en la subregión no sólo porque fue necesario contratar una gran cantidad de personas para construir y poner a funcionar la empresa minera, si no por las oportunidades ofrecidas en este municipio en contraste con otros del departamento. Este proceso masivo de atracción de mano de obra se repitió en la etapa de ampliación de la planta en el año 2000, cuando atrajo a diversos grupos de población. En entrevista con un líder desplazado éste afirma que fue la oportunidad de trabajo en la ampliación de la planta lo que lo llevó, junto a toda su familia –hijos, hermanos y padres- a establecerse en Montelíbano<sup>22</sup>.

Sin embargo, en términos de su vocación económica, el municipio ha sido tradicionalmente agrícola, y como el resto del departamento de Córdoba, se ha destacado por la utilización de tierras en ganadería extensiva. Cabe resaltar que, a pesar de su importancia como actividad económica regional, la ganadería no es una fuente de trabajo entre la población dadas sus características. Hoy el casco urbano de Montelíbano contempla otras actividades como el comercio, fuertemente vinculadas a la existencia de la mina.

Finalmente, el municipio combina actividades legales con la actividad ilegal del narcotráfico, que ha sido controlada por diferentes grupos ilegales a través de la historia del municipio. Esta actividad ha estado permanentemente relacionada con las dinámicas de conflicto armado regional, y ha sido fuente de ingresos para gran parte de la población, especialmente en la zona rural del municipio.

---

<sup>21</sup> El municipio es creado por decreto 00810 del 12 de enero de 1954, segregado del municipio de Ayapel, con los corregimientos de El Andar, Juan José, Pica Pica, Puerto Libertador, Uré y San Francisco del Rayo. Ibíd. p.62.

<sup>22</sup> Entrevista a Líder Desplazado. Montelíbano, Marzo 2009.

### *Caracterización del conflicto armado regional*

La sub región del San Jorge vivió la emergencia del Ejército Popular de Liberación (EPL)<sup>23</sup> desde finales de 1965, así como su consolidación, decadencia y desmovilización en 1991.

Durante este proceso, el EPL realizó labores de reclutamiento para la conformación de una “colonia agrícola” en municipios del sur de Córdoba y al Noroccidente antioqueño, al tiempo que adelantó obras como escuelas, cooperativas, centros de atención médica, caminos y puentes, entre otros. Lograron el control de la zona a tal punto que en diciembre de 1967 instalaron retenes en la zona y expidieron salvoconductos para poder entrar en ella. En enero de 1968 asaltaron el puesto de policía de Uré, y en junio de ese mismo año asaltaron el campamento de la compañía que adelantaba exploraciones en Cerro Matoso, incendiando entre otras cosas, sus vehículos<sup>24</sup>.

Esta es la primera vez que la empresa se encuentra inmersa en las dinámicas subregionales de conflicto armado ya que los inconvenientes afrontados para su constitución como empresa respondieron más a conflictos de carácter político que a intereses de grupos armados ilegales (Ver Anexo 1). Ante esta situación y como respuesta a la amenaza, la compañía generó alianzas con la fuerza pública para su protección que resultaron en el establecimiento de una base del ejército en cercanías de la mina con la que se ha mantenido una comunicación constante. Por varios años esta figura de cooperación se manejó en la forma de intercambios por ejemplo con la financiación, por parte de la compañía, de mejoras a las instalaciones de la base y el suministro de combustible a vehículos de la Fuerza Pública y en por un período a la policía. Actualmente este vínculo se formalizó en un convenio entre la empresa y el Ministerio de Defensa en el marco de la protección a la infraestructura económica del país por parte de la Fuerza Pública. Estas alianzas han funcionado como un elemento disuasivo para los grupos armados al margen de la ley que han operado en esta región.

---

<sup>23</sup> El EPL (Ejército Popular de Liberación) se constituye en mayo de 1965, a raíz de la ruptura chino-soviética, y se convierte en el brazo armado del PCML (Partido Comunista Marxista-Leninista), que asume la tesis china de la «guerra popular prolongada». Tomado de NEIRA, Enrique. Un caso intrincado de violencia Colombia. En: Nueva Sociedad No.105 Enero-febrero 1990. p 141-152

<sup>24</sup> NEGRETE. Op.cit. *Los obstáculos del desarrollo de Córdoba*.

El EPL logró gran influencia en grupos de campesinos, estudiantiles y sindicalistas, entre ellas la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), la Federación de Estudiantes de Córdoba y en actividades como el paro cívico de 1974.

En la primera conferencia nacional del EPL en 1981 el grupo decidió recaudar fondos por diferentes medios para continuar la lucha armada. Se crearon entonces las llamadas “contribuciones voluntarias” de ganaderos, agricultores y empresarios, así como el uso de otras modalidades como la extorsión y el secuestro, “al narcotráfico le cobraban una especie de impuesto o participación por carga enviada al exterior”<sup>25</sup>. No hay evidencia sobre el pago de estas contribuciones por parte de la compañía, lo que puede explicarse en dos hechos concretos: las dudas sobre la viabilidad económica del proyecto de Cerro Matoso hasta 1988 debido tanto a los problemas técnicos en la producción como a los bajos precios del níquel (ver Anexo1); y la presencia del ejército y la policía en la mina.

Las FARC comenzaron su incursión en el departamento hacia 1980 con el frente 5 que operaba en el norte del departamento de Antioquia. Luego formarían en la región los frentes 18, 35, 37 y el 58 cuyo centro de operaciones sería Córdoba.

En 1987 convergieron diferentes sucesos en este departamento: el Ejército reforzó su presencia militar en la zona e inauguró la XI Brigada en Montería, la capital del departamento; el narcotraficante y paramilitar Fidel Castaño constituyó un ejército privado; y ganaderos y comerciantes pasaron de aportar a la guerrilla como “vacuna ganadera” a hacerlo a las autodefensas como “aportes a la seguridad”<sup>26</sup>. Diferentes entrevistados manifiestan su percepción sobre un posible acuerdo entre la empresa minera y los grupos de autodefensa, sin embargo, no se encontró evidencia que soporte que el cambio de actor en el conflicto armado en el departamento haya impactado a Cerro Matoso.

Según el jefe del Bloque Norte de las AUC que controlaba la región

“empresas como Cerro Matoso, como Drummond, todas aquellas empresas que tenían al interior de la mina de explotación bases militares construidas por ellos, pagas por ellos, alimentación paga por ellos a los militares que están ahí, es decir, pagan por ellos al

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> ROMERO, Mauricio. *Paramilitares y Autodefensa. 1982-2003*. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI. Universidad Nacional de Colombia, junio de 2003.



Estado, esas empresas jamás tributaron un solo peso a los estados regionales de autodefensa o a los estados regionales de guerrilla”<sup>27</sup>.

A pesar del contexto, Cerro Matoso S.A. vivía una situación de bonanza debido a la recuperación de los precios del níquel y adelantaba proyectos de ampliación de su capacidad instalada. En contraste, en la zona bananera de Urabá se vivía la salida masiva de inversionistas que amenazaba con una crisis del eje bananero<sup>28</sup>.

Luego de la desmovilización del EPL en 1991, y ante la presencia de las FARC, el ejército y los ganaderos de la región establecieron redes de inteligencia para que estos últimos se prestaran seguridad a sí mismos pues “el gobierno no era capaz de cubrir todas las áreas”<sup>29</sup>. En el departamento la relación con el Estado central sufrió un cambio significativo, pues las decisiones tomadas desde el centro no fueron compartidas por las élites regionales quienes habían padecido secuestros y extorsiones a manos de quienes se estaban desmovilizando y recibiendo indulgencias por parte del gobierno. “La amnistía de casi 500 guerrilleros detenidos y el inicio de negociaciones entre el Presidente Betancur y las principales organizaciones subversivas a finales de 1982 fueron recibidas como una franca traición por lo ganaderos cordobeses”<sup>30</sup>. En medio de esta etapa de negociaciones en Córdoba, ganaderos y comerciantes seguían siendo extorsionados y secuestrados, sirviendo de base para la consolidación del apoyo al “derecho a la defensa propia”. Sumado a esto, “narcotraficantes [que] en asocio con élites locales desafectas de la autoridad central, aprovechan esas nuevas condiciones institucionales y políticas para construir un aparato paramilitar”<sup>31</sup>.

Las autodefensas arremetieron contra quienes consideraban las bases de apoyo de la subversión y asesinaron a líderes, activistas y simpatizantes de la izquierda. Con los asesinatos de concejales, candidatos, campesinos, maestros, sindicalistas, indígenas, profesores universitarios y periodistas se buscó eliminar la oposición política en Córdoba<sup>32</sup>. En contravía con lo que sucedía en el resto del departamento, así como en otras zonas del país bajo el control paramilitar, el sindicato de trabajadores de Cerro Matoso, constituido desde los inicios de la empresa (Ver Anexo 2), no registró mayores

---

<sup>27</sup> Entrevista con Jefe del Bloque Norte de las AUC. Medellín, 11 de abril de 2008.

<sup>28</sup> ROMERO. Op.cit. p 145.

<sup>29</sup> Entrevista con Jefe de Seguridad CMSA. Montelíbano, octubre de 2007.

<sup>30</sup> ROMERO. Op.cit. p 137.

<sup>31</sup> *Ibíd.* p 138

<sup>32</sup> *Ibíd.*

contratiempos a pesar de haber tenido influencia del EPL entre sus miembros. Una de las razones de la poca trascendencia de la infiltración guerrillera en el sindicato de Cerro Matoso puede derivarse del debilitamiento y posterior desmovilización del EPL y el rápido ascenso de las autodefensas. Las entrevistas a diferentes actores sugieren que las particularidades de este sindicato están relacionadas con que éste no se percibió como una amenaza para los grupos de autodefensa porque a pesar de pertenecer a organizaciones de lucha sindical del nivel nacional como la Conferencia de Trabajadores de Colombia CTC, no tenían gran protagonismo en las luchas sindicales de ese momento. Según el jefe del Bloque Norte de las Autodefensas

“en Córdoba realmente no fue muy fuerte lo que sucedió con el sindicato de esta empresa de Ferroníquel, Cerro Matoso. Y no tuvimos esos problemas porque ellos finalmente se dedicaron a la defensa de los intereses de los trabajadores y con ellos no tuvimos ningún tipo de problema porque realmente la infiltración fue poca (...) ahí hubo unos brotes, se habló con ellos, se le pidió que salieran para evitar actuar militarmente y se fueron”<sup>33</sup>.

Lo anterior también está relacionado con la característica de procedencia geográfica de la mano de obra que extrae ferroníquel, específicamente con su procedencia geográfica. Aunque un gran número de trabajadores son de la Costa Atlántica, esta composición genera desapego a luchas regionales, y aún más de las luchas municipales (ver Anexo 2).

El caso de Sintracerrromatoso es llamativo en tanto se trata de un sindicato mayoritario en un contexto de conflicto armado con presencia paramilitar. Se esperaría que ante el discurso paramilitar de una guerrilla que se nutre de su base social, el sindicato hubiera perdido adeptos por presión de estos grupos. Esto no ocurrió en el caso de Cerro Matoso. Incluso tuvieron la posibilidad de expresarse públicamente en momentos de cambio en la compañía como por ejemplo en el proceso de privatización. En este suceso específico, el liderazgo de la clase política regional fue determinante a la hora de convocar a la población a manifestarse.

Bajo este nuevo escenario de orden público, las autodefensas ilegales replegaron a las FARC a los límites entre Antioquia y Córdoba, a las zonas altas del Nudo de Paramillo. Como respuesta, fortalecieron su presencia en Sucre y el frente 18 que operaba en Córdoba se replegó hacia el norte y bajo Cauca antioqueño. Como respuesta, entre 1997

---

<sup>33</sup> Entrevista con Jefe del Bloque Norte de las AUC., ex jefe del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Medellín, 11 de abril de 2008.

y 2001 las FARC reactivaron su ofensiva contra las autodefensas ilegales en la zona del Nudo de Paramillo que comprende los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador en Córdoba y, Dabeiba e Ituango en Antioquia. A partir de 1999, las autodefensas comenzaron una operación tipo “tenaza”<sup>34</sup> para oponerse la ofensiva de las FARC lo que les permitió mantener el control sobre algunos cascos urbanos de Antioquia y de Córdoba, entre ellos, Montelíbano<sup>35</sup>.

Estas disputas entre grupos en los municipios del sur del departamento de Córdoba se sustentan en la necesidad de controlar las rutas del narcotráfico. El sur del municipio de Montelíbano se ha visto afectado por esta situación y se refleja en los indicadores municipales de violencia. Por su ubicación geográfica, al norte del municipio y cerca de la cabecera municipal, la mina ha estado al margen de los enfrentamientos entre grupos. En esta zona se ha percibido a lo largo de toda la historia de la mina y a pesar de los cambios en las dinámicas de conflicto, un entorno tranquilo sin mayores contratiempos tanto para los empleados de la mina como para los habitantes del pueblo. Esto se ha podido lograr por los factores de presencia de la Fuerza Pública mencionados, así como por el manejo de la seguridad a través de redes de informantes entre la población que ha permitido a Cerro Matoso tomar medidas preventivas de seguridad antes que enfrentarse directamente con los grupos armados ilegales<sup>36</sup>. Quienes más cerca de las manifestaciones de conflicto armado subregional se han encontrado han sido los empleados de la Fundación San Isidro encargada de las Responsabilidad Social de Cerro Matoso. Trabajadores de la fundación manifiestan que

“Compañeros se encontraron con algunos grupos de la guerrilla. En ningún momento se dio el momento de que nos detuvieran porque entre comillas teníamos el prestigio de ser una organización no gubernamental que dependíamos de Cerro Matoso y llevábamos desarrollo a las comunidades entonces ellos [la guerrilla FARC] respetaban eso. Hubo requisas, para dónde van, de dónde vienen (...) También con paramilitares nos encontrábamos (...) dependiendo del sector”

En la actualidad el municipio de Montelíbano, y en general el departamento de Córdoba, afronta variaciones en las dinámicas de violencia a raíz de la desmovilización de las

---

<sup>34</sup> En términos militares hace referencia a una operación táctica que busca cercar a un enemigo evitando que se dispersa y huya.

<sup>35</sup> VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Los Derechos Humanos en el Departamento de Córdoba. Bogotá, 2003.

<sup>36</sup> Entrevista a Jefe de Seguridad CMSA. Montelíbano, octubre 2007.

Autodefensas Unidas de Colombia en 2003. Como resultado de una negociación en medio del conflicto y la persistencia de otros grupos armados ilegales y de redes de narcotráfico se ha presenciado un proceso de reconfiguración de grupos criminales que “sugiere que existe una demanda de seguridad para el negocio de las drogas, e incluso de requerimientos de control territorial en zonas donde la desmovilización de las autodefensas dejó un vacío de poder, que más temprano que tarde está siendo copado por nuevas estructuras paramilitares o por formas recicladas de las anteriores estructuras”<sup>37</sup>.

Cifras de la Alta Consejería<sup>38</sup> para la Reintegración muestran que en 2008 el número de desmovilizados de las AUC en el municipio de Montelíbano llegó a 128. De los datos cabe mencionar que el 70% de los desmovilizados del departamento de Córdoba se dedican a actividades ilegales que incluyen tanto criminalidad como vínculos con redes de narcotráfico.

En el municipio de Montelíbano se encuentra hoy bajo la influencia de nuevos grupos al servicio del narcotráfico: “Las Águilas Negras” y “Los Paisas” según información de la Policía de Córdoba, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales<sup>39</sup>. Estos grupos no sólo se preocupan por proteger las rutas de movilidad sino que atraviesan un proceso de reconfiguración de poderes subregionales en donde utilizan la intimidación para establecer el control de la población que tenían los grupos de autodefensa que operaban en la zona hasta 2003. La situación resulta más compleja si se tiene en cuenta que se han revelado vínculos de la Fuerza Pública con estos grupos<sup>40</sup>.

El cambio en las dinámicas de conflicto ha afectado a la región y a la empresa como parte de ella. Nuevos grupos han intentado extorsionar a contratistas de la empresa así como a comerciantes y empresarios de la región. Según información de CMSA, la situación ha sido manejada desde la oficina de seguridad de la compañía en alianza con la Fuerza Pública. Hasta el momento, estas extorsiones no se han hecho efectivas<sup>41</sup>.

---

<sup>37</sup> FUNDACIÓN SEGURIDAD Y DEMOCRACIA. “Informe Especial: El Rearme Paramilitar”. Bogotá Fundación Seguridad y Democracia. Junio de 2007. P. 13

<sup>38</sup> Consultado en [www.reintegración.gov.co](http://www.reintegración.gov.co), 15 de septiembre de 2008.

<sup>39</sup> NEGRETE. Op.cit. *Los obstáculos del desarrollo de Córdoba*. P. 21.

<sup>40</sup> “Alianzas entre los militares de Córdoba y ‘Los Paisas’ se descubrió por crimen de ganadero”. En: El Tiempo. 18 de abril de 2008.

<sup>41</sup> Entrevista a Jefe de Seguridad CMSA. Montelíbano, marzo de 2009.

### *Impacto de la economía ilegal en el municipio*

Uno de los principales motores de las disputas entre grupos por el control de la zona se deriva de la necesidad de controlar rutas del narcotráfico. La economía ilegal aparece en este caso en convivencia pacífica con la economía legal minera en tanto generadora alternativa de ingresos para los pobladores de la zona.

El municipio de Montelíbano hace parte de un corredor estratégico de grupos armados ilegales, y dada su cercanía al Nudo de Paramillo<sup>42</sup>, una zona con presencia de cultivos ilícitos, se encuentra haciendo parte de la retaguardia de grupos guerrilleros y de autodefensa interesados en controlar las principales vías de comunicación entre Córdoba y Antioquia<sup>43</sup>.

Datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, establecen que para 1999 en Córdoba había 1.920 hectáreas cultivadas de coca, en el año 2.000 apenas se registraron 1.267, en 2001, 640 y en 2005 740 hectáreas. Sin embargo, estas cifras fueron cuestionadas en entrevista a un jefe paramilitar desmovilizado, quien afirma que sólo en el departamento de Córdoba hay entre 15 mil a 18 mil hectáreas, y que estos datos que no pueden ser captados por SIMCI con el sistema de monitoreo satelital ya que esta zona al ser bosque húmedo tropical cuenta con un estado nublado permanente<sup>44</sup>.

Más allá de la diferencia en las cifras, la problemática de los cultivos ilícitos en la zona se extiende al impacto social: esta actividad “le ha brindado a una pequeña población la oportunidad de ganar algunos dineros extras, eso ha sido un conflicto social bastante grande porque ha desplazado al agricultor, a la persona urbana, a estas zonas en las que en poco tiempo logran ganarse algún dinero y lo vuelve dependiente de una economía ficticia”<sup>45</sup>. Este hecho se evidencia en situaciones como que “cada vez que la policía, antinarcóticos y la DEA (...) fumigan ahí es cuando se nota la presencia de toda [la] gente

---

<sup>42</sup> Es necesario diferenciar el nudo orográfico de Paramillo y el Parque Nacional Paramillo. El primero está contenido en el segundo y está situado en la cordillera occidental, en jurisdicción de los municipios de Dabeiba, Ituango y Peque, en el departamento de Antioquia, lugar en el que se bifurcan las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel y nacen los ríos Sinú y San Jorge. El Parque Natural Nacional Nudo de Paramillo cubre 460,000 hectáreas y abarca la gran extensión de selvas de los pisos térmicos cálido, templado y frío en el extremo norte de la cordillera occidental en los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano en el departamento de Córdoba, y Dabeiba, Ituango y Peque en el departamento de Antioquia VICEPRESIDENCIA. Op.cit.

<sup>43</sup> Entrevista con el ex Jefe Operaciones Conjuntas FFMM. Bogotá, agosto 2007.

<sup>44</sup> Entrevista con Jefe del Bloque Norte de las AUC. Medellín, abril de 2008.

<sup>45</sup> Entrevista con Líder sindical Sintraccerromatoso. Montelíbano, octubre 2007.

que está en este momento en esas áreas raspando o ayudando el proceso de la coca, y cuando esta la autoridad allá en su fumigación se vuelven acá a Montelíbano”<sup>46</sup>.

Esta forma de trabajo emerge en los años 90 cuando se genera una “cultura [entorno a los] cultivos ilícitos en el sentido que la gente vive de los cultivos ilícitos, directa o indirectamente, directamente son los que siembran, los que raspan, los que comercializan e indirectamente son los que tienen negocios, tienen comercios allá y que todo gira en torno a la plata del narcotráfico”<sup>47</sup>. De esta manera, emplearse en actividades asociadas al narcotráfico “se le convirtió en una alternativa al campesino”<sup>48</sup>.

Sin embargo, en la región ya hacía presencia la marihuana desde mediados de los años setenta y la tendencia nacional se fue fortaleciendo a lo largo del territorio en los años 80. Córdoba no estuvo por fuera de la dinámica expansionista de los capos que buscaban zonas con características particulares: baja presencia institucional, y condiciones geográficas aisladas y propicias para la siembra de cultivos ilícitos. Fueron “124 kilómetros de litoral; las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel; y el Parque Nacional Natural Paramillo con más de 300.000 hectáreas en el sur del departamento”<sup>49</sup>

Así como en otras zonas del país, los narcotraficantes fueron comprando tierras y creando empresas fachada para el lavado de dinero. En lugares como la subregión del San Jorge donde operaba el EPL se generaron alianzas en las cuales se intercambiaba protección por financiación. Estas alianzas no cambiaron a pesar que más adelante cambiarían los actores involucrados.

El narcotráfico es un factor decisivo al estudiar las motivaciones de los grupos armados ilegales para controlar la zona. El entendimiento de las agendas económicas de los grupos armados ilegales resulta crucial al momento de abordar los conflictos (Collier, 2000). Así, es posible observar que la importancia de la economía ilegal como fuente de ingresos de las autodefensas ilegales influyó en sus decisiones respecto a Cerro Matoso. En palabras del jefe del Bloque Norte de las AUC

“(…) Por ejemplo en Córdoba, no nos financiamos (de recursos como los de CMSA) porque los recursos del narcotráfico eran suficientes para financiar las tropas. Por lo tanto

---

<sup>46</sup> Entrevista Jefe de Seguridad CMSA. Montelíbano, octubre de 2007.

<sup>47</sup> Entrevista Comandante de la XI brigada. Montería, octubre de 2007.

<sup>48</sup> Entrevista con Jefe del Bloque Norte de las AUC. Medellín, 11 de abril 2008

<sup>49</sup> NEGRETE. Op.cit. *Los obstáculos del desarrollo de Córdoba*.

no tuvimos que recurrir a finanzas diferentes, no tuvimos que pedirle a los ganaderos, a los agricultores, a los empresarios de esas zonas específicas que tributaran económicamente al estado de autodefensa que existía allí”.

Finalmente, cabe mencionar que la importancia de la economía del narcotráfico en la zona se ajusta a las hipótesis planteadas en la literatura (Le Billon, 2001). Los cultivos de coca son un recurso de tipo difuso (no concentrado en una pequeña área geográfica) pues se extienden a lo largo de miles en el espacio del Parque Nacional del Paramillo correspondientes a territorios del departamento de Córdoba. Sumado a esto, se trata de un cultivo distante del centro de poder más cercano, Montería. Según la clasificación de Le Billon se espera que derive en un tipo de conflicto específico, el “warlordism”. Lo que sucede en el departamento es precisamente ese tipo de dinámica de conflicto, en la cual los grupos armados ilegales, en este caso grupos de autodefensa, crean áreas de soberanía de facto impuestas por medio de violencia.

### *La clase política regional*

Para entender el papel que juega la clase política cordobesa en la relación entre la minería del níquel y el conflicto armado en Colombia es necesario mencionar algunos sucesos de la historia política de la región desde el descubrimiento del yacimiento.

En los años 50, cuando se descubrió la mina de níquel la situación política regional estaba caracterizada por la lucha entre los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, tendencia que se vivía en todo el país. El departamento de Córdoba, antes municipio de Montería y parte del departamento de Bolívar, fue creado en medio de este contexto y bajo la influencia conservadora. Como en el resto del país, los enfrentamientos bipartidistas giraron principalmente alrededor de luchas por el control de los organismos de gobierno, por la posesión de la tierra y la búsqueda electoral tanto rural como urbana.

En la época conocida como el Frente Nacional (1958-1974)<sup>50</sup>, luego del fin a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, los grupos políticos de Córdoba formaron coaliciones

---

<sup>50</sup> El período conocido como Frente Nacional consistió en un régimen de coalición bipartidista que gobernó a Colombia entre 1958 y 1972 luego de la renuncia del dictador Gustavo Rojas Pinilla. Para más información

con fines electorales, algunas incluso entre liberales y conservadores. En este contexto nacional, la clase política cordobesa surgió de los liderazgos formados en Montería algunos de los cuales mantuvieron una estructura de tipo familiar que se mantiene hasta hoy.

Durante el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay (1978-1982) se estableció formalmente la figura conocida como “comisiones” para acceder a cargos públicos y contratos. Estas consistían en la entrega de un monto de dinero, por ejemplo un porcentaje del valor del contrato para la asignación de este a amigos, familiares o allegados a los grupos políticos, al mismo tiempo que los funcionarios públicos obtienen ganancias extras<sup>51</sup>. Esta figura determinó en el departamento las dinámicas políticas, así como lo hizo en otras regiones del país.

Adicionalmente, los vínculos de la clase política con el narcotráfico se hicieron evidentes desde los años 80. Llama la atención el caso del movimiento Insurgencia Liberal, formado por los políticos costeños Francisco Jattin y el senador Jorge Elías Náder quienes lograron en un mismo período legislativo dos altos cargos a nivel nacional: la presidencia de la Cámara y la del Senado en el Congreso de la República.

“Poco tiempo después el Consejo de Estado le declaró la pérdida de investidura a Francisco Jattin por conflicto de intereses en relación con la aprobación de un proyecto de ley sobre la despenalización del enriquecimiento ilícito y la Corte Suprema de Justicia condenó a Jorge Elías Náder por enriquecimiento ilícito, inhabilitándolo políticamente a aspirar a cargos públicos. Por el mismo cargo fue condenado Jaime Lara del grupo Mayorías Liberales que seguía las orientaciones del senador Juan Manuel López”<sup>52</sup>.

Sus nombres aparecieron en los principales medios<sup>53</sup> como parte del escándalo conocido como “Proceso 8.000”, el proceso judicial en contra del presidente Samper (1994-1998) por infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña política.

Los mismos grupos han mantenido el poder regional y se han adaptado a las cambiantes situaciones en términos de violencia que ha enfrentado la región. Montelíbano no está

---

ver: ARCHILA, Mauricio. “El Frente Nacional: una historia de enemistad social”. En *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura* 24. 1997.

<sup>51</sup> NEGRETE. Op.cit.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> “El 8.000 día a día”. En: Revista Semana. Lunes 8 de enero de 1996.



exento de esta situación, la alcaldía municipal ha estado en manos de la familia Náder principalmente, ejemplo de esto son las cinco administraciones de Moisés Náder Restrepo y su apoyo electoral a otros alcaldes. Otras familias tradicionales de la región han obtenido la alcaldía del municipio lo que habla de continuismo en el poder de las élites locales.

El fenómeno conocido como parapolítica<sup>54</sup> puso al descubierto las estrechas relaciones de los grupos políticos tradicionales de Córdoba con los grupos ilegales de autodefensa predominantes desde la década de los 90, lo que deslegitima las instancias legales y difumina las distinciones de la población entre la legalidad y la ilegalidad. Lo interesante de esto es que son los mismos grupos políticos los que son mencionados en esta nueva ola de escándalos. Así las cosas, el significado de la guerra en este municipio se encuentra claramente arraigado a vulnerabilidades políticas y económicas como lo plantea Le Billon (2001).

En este escenario, la economía legal alrededor del ferroníquel aparece como elemento potenciador del conflicto armado subregional. Los ingresos municipales generados por la existencia de la mina de níquel en la forma de regalías han nutrido las complejas relaciones entre la clase política y los grupos armados ilegales. Estas alianzas para acceder al poder hacen parte de la estrategia de control político en territorios de control paramilitar caracterizada por la captura de rentas, la orientación de la inversión, el monopolio de los negocios y la participación en megaproyectos<sup>55</sup>.

Para complementar el panorama, los testimonios de pobladores de la zona dan cuenta del poder de decisión de grupos armados ilegales de la mano con la clase política subregional. Un trabajador de CMSA afirma que

“los comentarios que se alcanzan a recibir en la población es que los grupos armados al margen de la ley sobre todo el paramilitarismo de una u otra manera se ha beneficiado de esas regalías a través de grandes proyectos (...) sonó que el hospital local de Montelíbano

---

<sup>54</sup> La parapolítica es el nombre con el que se conoce la escándalo político que vincula a políticos con paramilitares. Estos vínculos empezaron a evidenciarse a partir de 2006 derivado de las versiones libres de desmovilizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia. Alejandro Gaviria afirma “la parapolítica es el resultado de la puja por unas rentas estatales, por los dineros de las regalías y de la salud especialmente. La parapolítica es, en otras palabras, una forma sofisticada de corrupción”. GAVIRIA, Alejandro. “Sobre la reforma política” en *El Espectador*. 11 de abril de 2008.

<sup>55</sup> FONDO NACIONAL POR COLOMBIA. Op.cit. P 3.

estuvo administrado al mando de esos grupos, que algunas administraciones fueron montadas o auxiliadas por algunos grupos al margen de la ley, administraciones municipales, e igualmente algunos concejales recibieron beneficios, pero (...) son situaciones donde no hay una evidencia clara”<sup>56</sup>.

Un miembro de la Fundación San Isidro, fundación encargada de la Responsabilidad Social Empresarial de CMSA, asegura que “ellos había puesto a un gerente del hospital a administrar”.

Un ex empleado de la fundación Panzenú, encargada de proveer salud a los empleados de Cerromatoso y a sus familias, comenta que los desvíos presupuestales se evidencia en que siendo un municipio que recibe un monto elevado de regalías aún cuenta con población no asegurada en el sistema de salud.

“(...) Cerro Matoso no puede decirle al municipio como invertir las regalías, no [se tiene] poder para eso, pero si [se puede] presionar para que haya aumentos de la cobertura de aseguramiento. Este es un municipio que debería estarse acercando en los próximos años a la cobertura universal en salud (...) En Puerto Libertador y la Apartada el caso es mucho peor, básicamente por fenómenos corrupción (...) pareciera que a los municipios les conviene no tener una red pública fuerte ¿por qué? Porque necesariamente alguien tiene que prestar los servicios de salud, los aseguradores que están contratados por el municipio si no encuentran oferta pública contratan con IPS privadas [que] con frecuencia son propiedad de las mismas personas”<sup>57</sup>

El sector salud aparece como enlace entre los ingresos generados por la minería, la clase política y el paramilitarismo.

Tal es el interés sobre las regalías que las discusiones no terminan. En 2006, varios alcaldes de la subregión del San Jorge y el representante a la Cámara Dumith Nader Cura pidieron al gobierno nacional cambiar el sistema de regalías con el fin de dar mayores recursos para invertir en la región. En esta misma reunión el Nader Cura pide citar al gerente de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge -CVS- para que explique cuál ha sido la destinación de las regalías provenientes de la explotación de la mina<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Entrevista con líder sindical Sintracerrromatoso. Montelíbano, octubre de 2007.

<sup>57</sup> Entrevista con el director de la Fundación Panzenú. Montelíbano, 4 de octubre de 2007.

<sup>58</sup> “Piden al Gobierno cambiar sistema de regalías”. En: El Meridiano. 11 de noviembre de 2006.

La hipótesis que genera Le Billon (2001) a partir del análisis de Estados, es aplicable a la región en cuestión pues son las características geográficas, históricas, políticas y sociales las que determinan la forma como se presenta la relación entre recursos y conflicto en el municipio de Montelíbano. Como plantea este autor, recursos mineros de este tipo son más asequibles a los gobiernos que a los movimientos rebeldes. Se debe aclarar que el caso estudiado es más complejo en tanto ser asequible a los primeros posibilita el acceso a los segundos dados los vínculos entre la clase dirigente y los grupos de autodefensa ilegales.

De la literatura sobre recursos y conflicto cabe resaltar la que estudia el tipo de institución de extracción presente en la minería. En el caso del ferroníquel participan actores públicos y privados. E incluso después de la privatización de la empresa sigue siendo a privatización de la producción de ferroníquel resultó en un proceso vigilado por las autoridades de gobierno en el cual la empresa está obligada a hacer un aporte de regalías a la CVS, al departamento de Córdoba, al puerto de Cartagena y a los municipios de influencia (ver Anexo 1).

Según Snyder (2006) este tipo de institución predice menor probabilidad de disputas bajo las características de los países estudiados. Sin embargo, el autor expone que los cambios en la distribución del poder pueden generar conflicto. El caso de Cerro Matoso S.A. muestra cómo la lucha por el poder sobre la empresa ha generado conflictos al interior de la clase política regional llevando a debates de tipo nacional incluso en condiciones democráticas. La corrupción, así como los vínculos con grupos armados ilegales determinaron en el caso estudiado el rumbo de las tensiones y sus posteriores salidas.

### *Elecciones*

En concordancia con lo anterior, la situación electoral del departamento se convierte en un aspecto de especial interés para el análisis. Esta ha estado mediada de nuevo por los vínculos entre elites regionales y grupos de autodefensa, vinculados con narco traficantes, cuya motivación como se mencionó anteriormente son los recursos provenientes de las regalías. Investigaciones sobre la situación electoral en el país muestran que en las tres

últimas décadas el narcotráfico sobrepasó los intereses y necesidades de protección e impunidad, apuntando a la consolidación de una fuerza política propia que le permitiera controlar aspectos sociales, políticos y económicos, tanto a nivel local como nacional, apoyándose en organizaciones armadas de carácter privado<sup>59</sup>. Este hecho lo confirma el jefe del Bloque Norte de las autodefensas quien afirma:

“Nosotros si creamos estados regionales de autodefensa donde los comandantes máximos éramos los jefes de estado, y donde lógicamente teníamos el control de la tributación, de la justicia, el control y monopolio militar territorial de las regiones donde estábamos, era un estado de facto, las determinaciones que tomábamos la cumplía el pueblo y todas las empresas que en su mayoría no tenían protección de las fuerzas militares colombianas”<sup>60</sup>

Los candidatos a las elecciones locales se aliaron con los jefes paramilitares, quienes, a través de su aparato coercitivo, pudieron obtener alcaldías, concejos, asambleas y gobernaciones. Esta influencia logró su llegada a la escena nacional en instancias como el Congreso<sup>61</sup>. Todo esto facilitó el aprovechamiento de las regalías por parte de los grupos armados ilegales.

En las elecciones de 2002 tanto como para congreso como para la presidencia estuvieron mediadas por los grupos armados ilegales. Ejemplo de esto son los vínculos de senadores como Eleonora Pineda con Salvatore Mancuso<sup>62</sup> ex jefe del Bloque Norte de las autodefensas recientemente desmovilizado y extraditado.

Esta situación continúa aún después del proceso de negociaciones del gobierno Uribe y los grupos de autodefensa desde 2003. Los resultados de las pasadas elecciones de octubre de 2007, la permanencia de los vínculos entre la clase política y grupos armados ilegales:

“Montelíbano y Tierralta son dos municipios que habían sido tradicionalmente feudos de Salvatore Mancuso, pero también de dos caciques liberales: Salomón Arana y Juan Manuel López. Aquí, en las estribaciones del Nudo de Paramillo aún persiste la sombra del temido líder paramilitar, en donde se dice que ganó en Montelíbano y perdió en Tierralta. En Córdoba, de 28 alcaldías, 14 fueron conseguidas por el partido liberal, manejado por Juan Manuel López

---

<sup>59</sup> LOPEZ, Claudia y DUNCAN, Gustavo. Coca, balas y votos ¿Cómo incidió el narcotráfico en las pasadas elecciones?. Bogotá Edición en Alianza con Votebien.com.

<sup>60</sup> Entrevista con Jefe del Bloque Norte de las AUC. Medellín, 11 de abril de 2008.

<sup>61</sup> LOPEZ y DUNCAN. Op,cit.

<sup>62</sup> “Eleonora Pineda saldría libre en noviembre”. En: Revista Semana. 23 de octubre de 2008.

Cabrales preso en la (cárcel de la) Picota por nexos con la parapolítica. López un reconocido cacique liberal respaldó la candidatura en Tierralta de Aníbal Ortiz. Lo que parece ocurrir en esta zona del departamento, con una guerrilla debilitada y las AUC en una posición de reconstruir fuerzas políticas, sin una presión amada evidente, es que los antiguos jefes paramilitares o sus antiguos socios intentaron mantenerse en el poder financiando campañas<sup>63</sup>.

Estos hechos son corroborados en declaraciones recientes el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en las que vincula a 25 alcaldes de la Costa Atlántica con las autodefensas. Entre ellos se encuentra el ex alcalde de Montelíbano Moisés Nader. En esta declaración, realizada en mayo de 2007, también vincula a políticos tradicionales de Córdoba como Libardo López y Salomón Nader, entre otros<sup>64</sup>.

Esta caracterización no escapa de las dinámicas de conflicto en el campo electoral que se presentan en territorios con influencia paramilitar, en los que se presenta incidencia y toma del poder local por la vía de pactos, avales, preselección y apoyo a candidatos, entre otros<sup>65</sup>.

#### **IV. El Ferroníquel en la discusión sobre recursos y conflicto**

Con el fin de generar hipótesis sobre la relación entre recursos y conflicto en el municipio de Montelíbano, se realizó un ejercicio previo al análisis cualitativo. Se graficó la tasa de homicidios municipal normalizada y la serie de precios del ferroníquel entre 1990 y 2006.

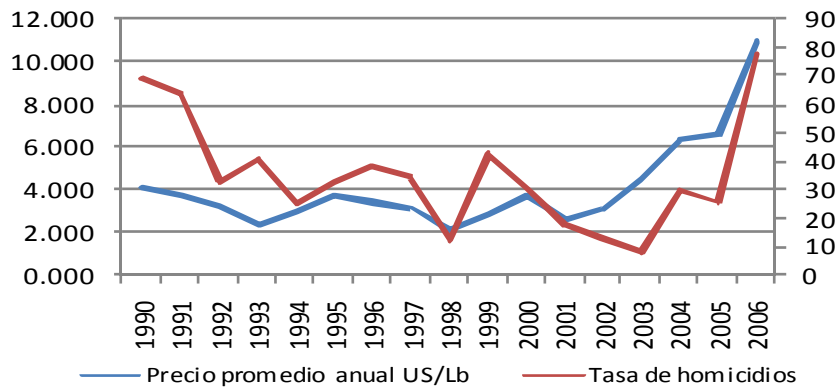
---

<sup>63</sup> LOPEZ y DUNCAN. Op.cit.

<sup>64</sup> “Jefe del Bloque Norte de las AUC. vincula a más políticos con las autodefensas”. En: Revista\_Semana. 16 de mayo de 2007.

<sup>65</sup> FORO NACIONAL POR LA PAZ. Op.cit. P 6.

**Precios del níquel \$US/Lb vs. Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en el municipio de Montelíbano.**



Fuente: Bolsa de metales de Londres. Revista Forensis. Observatorio de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Del análisis gráfico puede pensarse en la existencia de una relación directa entre las dos variables de manera que las variaciones en los precios del mineral podrían ser determinantes en la tasa de homicidios del municipio de Montelíbano. Con el fin de determinar si esta hipótesis tenía validez cuantitativa se realizaron correlaciones que mostraron que la relación no es significativa (ver Anexo 3). Sin embargo, cabe preguntarse sobre el por qué de estas tendencias similares.

Fue la investigación cualitativa la que permitió entender como cada variable varía según su dinámica particular, dinámica que no está relacionada con el comportamiento de la otra. Cabe explicar algunos momentos en los cuales ambas variables cambian su tendencia en el mismo sentido:

El primero es el comienzo de los años 90. En 1988, cuando el precio del níquel se recupera producto de las dinámicas mundiales de oferta y demanda, se están gestando en Córdoba los grupos de autodefensa que se enfrentan a reductos de antiguos grupos guerrilleros como el EPL y responden a la amenaza de movilidad de las FARC hacia Córdoba.

Hacia 2003 coincide la baja de precios del níquel con la preparación de los grupos ilegales de autodefensa para el proceso de negociación y desmovilización que se realiza con el primer gobierno Uribe Vélez (2002-2006). Para ese momento la hegemonía paramilitar es contundente y razón por la cual las amenazas para este grupo armado ilegal son muy pocas.

Finalmente la escalada de los precios del níquel en los últimos años coincide con el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de las AUC, hecho que ha generado disputas por el control del narcotráfico entre la guerrilla y nuevos grupos conocidos como Bandas Emergentes.

En la actualidad es posible que las dos variables vayan en sentidos opuestos ya que mientras los precios del níquel sufrieron una importante caída hacia finales de 2007 producto de la recesión mundial, la tasa de homicidios está aumentando vertiginosamente como resultado de la reconfiguración de la violencia post-desmovilización de las AUC.

Como se ha ido mostrando a lo largo del texto, son varios los factores que median la relación entre minería del níquel y conflicto armado en Colombia. La coexistencia de la economía minera y la coca en Montelíbano; los vínculos entre clase política y los actores armados ilegales; y la alianza estratégica de la empresa con la fuerza pública y la comunidad en un lugar geográfico con características particulares.

Los dos primeros han sido analizados en detalle en los capítulos anteriores. Vale la pena detenerse un poco más en el último.

#### *Factores explicativos en la relación recurso y conflicto: geografía, Fuerza Pública y comunidad*

Los diferentes actores entrevistados sugieren la posibilidad de la existencia de acuerdos entre la empresa y los grupos armados ilegales para permitir que Cerro Matoso funcionara en un ambiente de relativa paz. Esto puede pensarse al observar la situación diferenciada de la minería del níquel frente a la empresa vecina Carbones del Caribe, víctima de un atentado a principios de los años 90, y otras empresas mineras que han sido objeto de extorsiones, secuestros y homicidios.

Empleados de la compañía aseguran que esta situación no se ha presentado en la mina de ferroníquel, lo que parece encontrar su explicación en elementos geográficos pues “Carbones del Caribe [compañía presente en el sur de Córdoba] está más cerca a Puerto libertador, al Nudo de Paramillo”<sup>66</sup> una zona montañosa que facilita la actividad armada ilegal. Es necesario resaltar que Montelíbano estuvo durante cerca de 15 años dentro de una zona de hegemonía paramilitar cuyo *modus operandi* no se caracteriza por el ataque a infraestructura como sí el de la guerrilla<sup>67</sup>.

De otro lado, la ubicación de la mina cerca de la cabecera municipal y al norte del municipio de Montelíbano permite que se perciba como un lugar tranquilo. Esto ha servido de elemento disuasivo para que grupos armados ilegales como la guerrilla no hayan realizado ataques a la infraestructura de la mina pues no tienen lugares donde refugiarse luego del ataque: “parece ser primero por la situación estratégica, el área no les permite a ellos hacer una incursión y el ejército no sea fácil encontrarlos, es un área plana, despejada, zona de ganado, si lo hablamos tácticamente no tendría ningún beneficio hacerlo”<sup>68</sup>. Sumando a esto, llegar hasta la cabecera municipal de Montelíbano implica para la guerrilla haber entrado en zona de dominio paramilitar lo que significaría un desgaste innecesario sin mayor justificación.

La “tranquilidad” no sólo se percibió durante la hegemonía paramilitar, ya se percibía cuando era el EPL quien tenía el control ilegal de la zona. Las manifestaciones de la violencia generada por los grupos armados ilegales se han presentado en su mayoría en zona rural y en zonas urbanas la presencia institucional del Estado<sup>69</sup> ha generado un ambiente distinto.

---

<sup>66</sup> Entrevista con Jefe de Seguridad CMSA. Montelíbano, octubre de 2007.

<sup>67</sup> Según la clasificación generada por la investigación liderada por el Foro Nacional por Colombia, existen diferencias entre los intereses y motivaciones según el tipo de actor armado. Así mientras a la guerrilla le interesa ampliar la movilidad en términos militares, a los paramilitares les interesa el control y el asentamiento. Cabe mencionar que en el aspecto económico, los primeros mantienen relaciones con el cultivo y tráfico de droga, mientras que los segundos además de este interés, buscan formas ampliadas de usufructo. Finalmente, en el campo político a la guerrilla le interesa conformar bases sociales y políticas, y a los paramilitares la implantación en el lugar de influencia con fines de contrainsurgencia. FORO NACIONAL POR COLOMBIA. Op. cit. P. 6

<sup>68</sup> Entrevista con Jefe de Seguridad CMSA. Montelíbano, octubre de 2007.

<sup>69</sup> Montelíbano es un municipio con presencia física de instituciones militares como la Policía y el Ejército. Además maneja funciones de Defensoría y Contraloría de otros municipios de la región a través de la personería. Entrevista con la personera. Montelíbano, marzo 2009. También cuenta con la presencia de Instituciones estatales como la Alta Consejería para la Reintegración por medio de la Pastoral Social y la Diócesis de Montelíbano. Entrevista con empleada de la Pastoral Social. Montelíbano, marzo 2009.



Se presenta un contraste entre las cifras de homicidios en Montelíbano y la percepción de seguridad de los entrevistados. Algunos<sup>70</sup> afirman que la tranquilidad en la zona los hace pensar que no viven en Colombia, e incluso algunos aseguraban en 2007 que tal era el ambiente pacífico que la desmovilización de las autodefensas “no se sintió”. Sin embargo, para 2009 la percepción de tranquilidad aunque no ha cambiado de manera alarmante, no es la misma que hace apenas 1 año. Se percibe una situación de intranquilidad derivada de la existencia de Bandas Criminales Emergentes que están realizando “limpieza social” en el municipio.

De otro lado, la cercanía de la Fuerza Pública a la mina genera desincentivos para actores armados como la guerrilla. En el caso del paramilitarismo, declaraciones recientes de ex jefes de las autodefensas han declarado la existencia de vínculos entre estos grupos y la Fuerza Pública<sup>71</sup>.

Finalmente, la posibilidad de financiación por medio de la economía ilícita del narcotráfico restó importancia a otras fuentes de financiación directa. Sumando a esto, como base de su funcionamiento Córdoba y Catatumbo estas dos regiones fueron excepcionales en cuanto al cobro por parte de las autodefensas, “el resto de las regiones, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar, todo el que tuviese más de cien hectáreas, tributaba a las autodefensas”<sup>72</sup>. Sin embargo, el jefe del bloque norte de las autodefensas también afirma que si no hubiera existido la posibilidad de financiarse con el narcotráfico en las regiones consideradas excepciones les “hubiese tocado recurrir a la financiación de todos los empresarios, en especial a las empresas más grandes”<sup>73</sup>.

Estas afirmaciones dan evidencia del predominio de los móviles económicos de los grupos ilegales de autodefensa interesados en el tráfico de drogas, pero a su vez en busca de diversas fuentes de financiación<sup>74</sup>, lo que en este caso no significó extorsiones y secuestros y sí el aprovechamiento de los ingresos municipales generados por la producción de ferroníquel por medio de la captura de rentas vía el control político.

---

<sup>70</sup> Entrevista con Jefe de Seguridad CMSA. Montelíbano, octubre de 2007.

<sup>71</sup> Ver Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. “Estado y Paramilitares” En: *Noche y Niebla* Consultado en <http://www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/deuda/html/pdf/deuda14.pdf> (Diciembre, 2008)

<sup>72</sup> Entrevista con Jefe del Bloque Norte de las AUC. Medellín, abril de 2008.

<sup>73</sup> Entrevista con Jefe del Bloque Norte de las AUC. Medellín, abril de 2008.

<sup>74</sup> FONDO NACIONAL POR LA PAZ. Op. cit.

Pero tener fuentes ingresos en el narcotráfico y en la administración pública no fue la única razón de las decisiones tomadas por los grupos armados ilegales. Las dificultades que se presentan en el aprovechamiento de la economía del ferróníquel de manera directa, que responden a las características del recurso en sí mismo, influyeron en la decisión. A diferencia de otros recursos del sector extractivo, no se trata de comercializar un producto terminado y fácil de conseguir en el mercado nacional sino que para su distribución se depende de reconocimiento político internacional para movilizar inversionistas y acceder a los mercados.

### *Responsabilidad Social Empresarial*

Según el Jefe de Relaciones Públicas de CMSA uno de los elementos definitivos para blindar a la compañía de ataques de grupos armados ilegales ha sido la labor de Responsabilidad Social Empresarial<sup>75</sup>.

Cerro Matoso S.A desarrolla su responsabilidad social a través de la Fundación San Isidro –FSI-, creada en 1981 por la compañía y la Prelatura del Alto San Jorge, hoy Diócesis de Montelíbano, con el fin de propiciar “el desarrollo socioeconómico en las comunidades del área de influencia”<sup>76</sup>. La alianza entre la empresa y el clero se da en el contexto de los años 80 en el que la Iglesia “tenía una representación muy importante en la región, jalonaba los procesos y era un interlocutor de mucha trascendencia”<sup>77</sup>. Esta alianza estratégica en principio “desarrolla actividad netamente asistencialista (...) atendiendo necesidades básicas de la comunidad”<sup>78</sup>, respondiendo a la necesidad de dar una solución rápida a la carencia de viviendas para los trabajadores de la empresa en un lugar apartado y precario. Las relaciones con la comunidad iniciaron con la Oficina de Desarrollo para la Comunidad, en 1980, “en ese mismo año se conformó una fundación que se llamaba Fundación San Isidro para atender un problema puntual y era un programa de vivienda con la empresa Servivienda de Bogotá. Al año y medio (...) se

---

<sup>75</sup> Entrevista Jefe Relaciones Públicas CMSA. Montelíbano, octubre 2007.

<sup>76</sup> FUNDACION SAN ISIDRO. 20 años de historia Fundación San Isidro 1981-2001. Montelíbano.

<sup>77</sup> Entrevista con José Rodríguez. Director de la Fundación San Isidro. 5 de octubre de 2007.

<sup>78</sup> Entrevista con José Rodríguez. Director de la Fundación San Isidro. 5 de octubre de 2007; Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo IDRC, Canadá. Iniciativa de Investigación sobre Políticas Mineras (IIPM/IDRC). 2003. *Empresas Mineras y Desarrollo Local. América Latina: Chile, Colombia y Perú. Resumen Ejecutivo*. Doble Clic Editoras. Montevideo.

comenzó a estructurar más la parte social de la empresa”<sup>79</sup>. Al mismo tiempo la empresa seguía la tendencia de “las empresas del sector petrolero y el sector minero [quienes] empezaron a crear sus fundaciones”<sup>80</sup>.

El carácter asistencialista de la FSI en sus inicios se manejó mediante la solución a peticiones explícitas de la comunidad por medio de donaciones. Estas peticiones se daban entorno a “espacios puntuales (...) un festival, una brigada de salud, una brigada de limpieza, o atender una emergencia como se atendió en el 97 la emergencia del río San Jorge, (...) pero que es coyuntural, una vez finalizada desaparece ese equipo de trabajo”<sup>81</sup>.

Casi una década después de iniciado su funcionamiento, en 1988, la fundación dirige su estrategia a la ejecución de programas de desarrollo social “sin suplantar la responsabilidad de las autoridades y entidades directamente involucradas en el proceso regional”<sup>82</sup> considerando insostenible la manera como venía desarrollado su apoyo a la comunidad.

Con este nuevo enfoque, la FSI buscó promover y desarrollar las políticas sociales en tres frentes: la generación de empleo e ingresos, formación de líderes y organizaciones comunitarias, fortalecimiento institucional y desarrollo comunitario. Los proyectos tenían como población objetivo a comunidades afectadas por fenómenos puntuales, comunidades que presentan proyectos dentro de los requisitos establecidos por la Fundación y comunidades que participan en los programas y obtienen la confianza de la Fundación. En 1999 la población de su área de influencia que participaba en estos proyectos alcanzaba el 42%<sup>83</sup>.

La política social de Cerro Matoso S.A. no sólo es ejecutada a través de la Fundación San Isidro, también lo hace a través de dos fundaciones más que atienden a los trabajadores de la empresa y a sus familias en temas de educación y salud respectivamente, la Fundación Educativa Montelíbano FEM, y la Fundación Panzenú. Su impacto en la región se evidencia en los indicadores de salud y educación creando para Montelíbano

---

<sup>79</sup> Entrevista con Fundación San Isidro. Montelíbano, 4 de octubre de 2007.

<sup>80</sup> Entrevista Director Fundación San Isidro. Montelíbano, octubre 2007.

<sup>81</sup> Entrevista con Fundación San Isidro. Montelíbano, 4 de octubre de 2007.

<sup>82</sup> FUNDACION SAN ISIDRO. Op.cit

<sup>83</sup> IDRC. Op.cit

estándares muy superiores a los registrados en municipios que no hacen parte del área de influencia de la mina.

La importancia de éste tema en la relación de la producción minera con el conflicto armado subregional reside en el carácter estratégico de la FSI. Ésta ha funcionado como legitimador de la existencia de Cerro Matoso en la comunidad y ha involucrado distintos sectores de la población del municipio con un objetivo definido: generar condiciones de desarrollo sostenible como legado social una vez se agote el yacimiento. Este discurso ha legitimado la labor de la minería del níquel en el municipio al tiempo que lo ha hecho frente a los actores armados ilegales que operan en la zona.

Dada su cercanía con la comunidad, la FSI ha generado redes de información respecto a la situación de orden público en los diferentes corregimientos que hacen parte del área de influencia de la mina. En palabras de una empleada de la fundación: “La comunidad nos protege. Si tenemos alguna reunión, y ven algún problema, ellos no llaman y nos dicen: por favor no vengán. Y luego nos avisan, ya no hay problema, ya pueden llegar”<sup>84</sup>.

## **V. Conclusiones y recomendaciones**

El análisis de la economía del ferroníquel en Colombia permite concluir que su carácter de recurso natural exportable, concentrado en un área específica del territorio no lo hace un motor directo del conflicto regional en el municipio de Montelíbano, pero sí un elemento potenciador de las dinámicas de conflicto presentes. La coexistencia de la economía legal y la ilegal en Montelíbano; la relación entre clase política local y actores armados al margen de la ley; y la alianza de la empresa, la fuerza pública y la comunidad en un lugar geográfico con características particulares son las tres principales características que median la relación entre recursos naturales y conflicto armado y que dan cuenta de las particularidades de la minería del ferroníquel en Colombia.

Los grupos armados ilegales no han sacado provecho directo de la economía legal en el caso del ferroníquel pero sí lo han hecho de manera indirecta, debido a que para su financiación han recurrido principalmente a recursos provenientes del narcotráfico y se

---

<sup>84</sup> Entrevista con Fundación San Isidro. Montelíbano, marzo de 2009.

han beneficiado de rentas derivadas del ferróníquel vía nexos con la administración pública.

Este panorama evidencia lo planteado por Le Billon (2001) cuando afirma que esta clase de recursos mineros son mucho más asequibles a los gobiernos que a los movimientos rebeldes. Sin embargo, la particularidad del ferróníquel es que en el entorno en el cual se produce ser asequible a los gobiernos locales significa ser asequible a los grupos armados ilegales de manera indirecta. El análisis de los procesos electorales, además de las declaraciones explícitas de ex jefes paramilitares, ponen de manifiesto la utilización de aliados políticos para lograr el acceso a la política local y por tanto a los recursos públicos.

La importancia del tráfico de drogas en las finanzas de los grupos armados ilegales, la captura de rentas locales a través de la clase política, el monopolio de los negocios y la determinación de los fines de inversión se ajustan a la caracterización planteada por el Foro Nacional por Colombia y la GTZ (2008) para los municipios de predominio paramilitar. De la información que se pudo recolectar en la investigación, el sector de la salud en Montelíbano refleja una de las formas en que las autodefensas lograron apropiación ilegal de recursos de las regalías.

De otro lado, llama la atención que los grupos armados ilegales no hayan desestabilizado a la empresa por medio de ataques a la infraestructura propia de la compañía o al servicio de ésta. Las características del recurso en sí mismo juegan un papel determinante en este sentido ya que no se trata de comercializar un producto terminado y fácil de conseguir en el mercado nacional, sino que para su comercialización es necesario contar con reconocimiento político internacional para contactar a los compradores y acceder a los mercados. Además de esto, la ubicación geográfica de la mina, la proximidad de la Fuerza Pública a la empresa tanto geográficamente como en términos de comunicación, y la cercanía de la empresa a la comunidad vía labores de Responsabilidad Social Empresarial han determinado la situación de tranquilidad en sus operaciones, más allá de las dinámicas propias de la producción, en la que ha vivido CMSA. Cabe resaltar que la comunidad aparece como red de información tanto para prevenir directamente a la empresa sobre la situación de orden público en el municipio, como para proveer información que será transmitida por la empresa a la Fuerza Pública.

Finalmente, un elemento interesante en el estudio sobre la minería del ferroníquel es la sindicalización (ver Anexo 2). En primer lugar porque generalmente donde se prohíbe o reprime la sindicalización de los trabajadores, se da una mayor tendencia a la radicalización de éstos y al reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Este comportamiento se cumple en la etapa inicial del sindicato, cuyos primeros esfuerzos de sindicalización fueron reprimidos por la empresa y luego permeados por la guerrilla del EPL como uno más de las herramientas utilizadas por la guerrilla para la generación de una base social y como parte de la utilización de “todas las formas de lucha”. Sin embargo, las dinámicas de conflicto armado en ese momento no parecieron tener mayor significado en el sindicato de CMSA. La relativa calma con que el sindicato de Cerro Matoso transitó de un entorno guerrillero a uno paramilitar se debió a que éste fue neutralizado por la amenaza de los grupos paramilitares sin cobrar víctimas como sí sucedió con otros sindicatos de la región. El acatamiento inmediato de mantenerse al margen y el centramiento de la lucha sindical hacia reivindicaciones exclusivamente laborales sin mayor incidencia política derivó en una convivencia con estos grupos caracterizados por la persecución a sindicalistas.

Lo anterior también está relacionado con una característica de la mano de obra que extrae ferroníquel, específicamente con su procedencia geográfica. Sólo el 7% de los trabajadores son de Montelíbano, y aunque un gran número de trabajadores del porcentaje restante son de la Costa Atlántica, su composición genera desapego a luchas regionales, y aún más de las luchas municipales. Adicionalmente, quienes logran acceder a opciones laborales con Cerro Matoso generan una lealtad hacia la empresa en tanto la posibilidad de una vinculación laboral formal en un contexto donde prima la informalidad.

#### *Recomendaciones de política pública*

En primera medida, resulta de suma importancia mantenerse atento sobre el desarrollo de la era post-desmovilización de las AUC. La reciente aproximación de estos grupos a la empresa vía intentos de extorsión a contratistas ha vulnerado la relativa tranquilidad en que vive la empresa y puede entorpecer la productividad de la misma. Antes de esto, el trabajo con desmovilizados debe propender a la continuación de los individuos en la vida civil evitando a toda costa su reincidencia en actividades de lucha armada ilegal.

Acorde con esto resulta necesaria la unión de esfuerzos a nivel regional para que el desmonte de las autodefensas sea efectivo. Ante la ausencia de motivaciones económicas sólidas como el narcotráfico, los procesos de Desarme, Desmovilización y Reinserción se fundamentarían en la necesidad de los grupos para buscar opciones de trabajo legales. Cabe resaltar que dichas opciones no existen por lo que surge la necesidad de crearlas.

Una segunda recomendación hace referencia al período actual que vive la mina, en el cual se tienen planes de expansión y exploración en un área geográfica más amplia. Aunque la caída de los precios del níquel haya frenado temporalmente el avance de nuevos proyectos y su puesta en marcha, debe promoverse una veeduría en el proceso de expansión de la mina para evitar injusticias por parte de quienes quieren obtener beneficios al vender sus tierras a la empresa. Así mismo debe prestarse especial atención a la propiedad de la tierra puesto que el proceso de desmovilización de las autodefensas ha evidenciado problemas estructurales en la tenencia de la tierra en la región.

Indiscutiblemente una tercera recomendación gira en torno a la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo esta lucha debe generar alternativas laborales para quienes que se ocupan en estas actividades.

Con respecto a las rentas derivadas del ferroníquel es indispensable la generación de mecanismos de control tanto en la asignación de regalías como en la utilización de las mismas. Es claro que cuando se pensó en 1982 que las regalías convertirían a Montelíbano en una ciudad intermedia, no se contaba con los inconvenientes por los cuales habrían de pasar estos recursos.

Finalmente, se necesita todo un proceso de cambio en la comunidad para contrarrestar su dependencia de aparatos de justicia privados o la necesidad de intermediación en la comunicación con la Fuerza Pública<sup>85</sup>. Todo lo anterior debe darse en un contexto de presencia institucional de facto, no sólo con la presencia física de las instituciones en las capitales municipales, que se ha evidenciado, funcionan parcialmente para su deslegitimación.

---

<sup>85</sup> Según el comandante de la Policía de Montelíbano en muchos casos la población no denuncia. Entrevista Comandante de Policía. Montelíbano, marzo 2009.

## Bibliografía

- ARCHILA, Mauricio. 1997. "El Frente Nacional: una historia de enemistad social". En Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 24.
- BERDAL, Mats. *et al.* Introduction. En: Greed & Grievance, Economic agendas in civil wars. Colorado: Lynne Rienner Publishers, 2000. p. 1-15.
- Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá). Iniciativa de Investigación sobre Políticas Mineras (IIPM/IDRC). 2003. *Empresas Mineras y Desarrollo Local. América Latina: Chile, Colombia y Perú. Resumen Ejecutivo*. Doble Clic Editoras. Montevideo.
- CERRO MATOSO S.A. 2003. *Evaluación de los Impactos Socioeconómicos del Complejo Minero Industrial de Ferroníquel de Cerro Matoso S.A. 1980-2003 / 2004-2020*. Impresos Ltda. Medellín.
  - 2005. *Informe y Balance Social*. Impresos Ltda. Medellín.
  - 2006. *Balance Social*. Impresos Ltda. Medellín.
- COLLIER, Paul, Anke Hoeffler and Måns Söderbom, On the duration of civil war. En: Journal of Peace Research, Vol. 41 (3), pp. 253-273, 2004.
- DÁVILA L. DE GUEVARA, José Camilo, Dávila L. de Guevara, Carlos, Jiménez Valencia Amparo, Milanés Reyes Laura Margarita y Rubio Peña, María Isabel. 2006. *Cerro Matoso S.A.: Sostenibilidad de una empresa minera en un entorno turbulento (1970-2003)* en Monografías de Administración. Universidad de los Andes. Bogotá.
- DEL CORRAL, Germán. 2003. Evaluación de la función y potencial de las fundaciones mineras y su interacción con las comunidades locales, en la serie Recursos Naturales e Infraestructura No. 58. CEPAL. Naciones Unidas, Santiago de Chile.



- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 2006. Informe de Coyuntura Regional (ICER). *Córdoba*.
- DE SOYSA, Indra. The resource curse: are civil wars driven by rapacity or capacity. En: BERDAL, M. and Malone, D(eds). Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars. Colorado: Lynne Rienner, 2000.
- DIJOHN, Jonathan. Mineral Abundance and Violent Political Conflict: A Critical Assessment of the Rentier State Model. Crisis States Programme Working Paper Series No. 1, 2002. Londres: Development Studies Institute, LSE.
- FUNDACIÓN SAN ISIDRO. 2001. *20 años de historia. Fundación San Isidro 1981-2001*.
- LE BILLON, Philippe. The Geopolitical Economy of Resource Wars. En: \_\_\_\_\_. Geopolitics of Resource Wars. Londres: Frank Cass, 2005. p. 1-28.
- LOPEZ, Claudia y DUNCAN, Gustavo. Coca, balas y votos ¿Cómo incidió el narcotráfico en las pasadas elecciones?. Bogotá: Edición en Alianza con Votebien.com.
- MELO, Hector. 1973. *La historia prohibida de Cerro Matoso*. Editorial Latina, Bogotá.
- NEGRETE, Victor. 1981. *Montelíbano, Pasado y Presente*. Fundación del Caribe, Montería.  
 1999. *Desplazados, Finqueros y Jóvenes creativos*. Acción contra el Hambre, Corporación Universitaria del Sinú, Fondo Educativo Departamental. Montería.

1999. *Encuentro con el Alto San Jorge, Memorias*. Acción contra el Hambre, Corporación Universitaria del Sinú. Montería.

2007. Los obstáculos del desarrollo de Córdoba. Centro de Estudios Sociales y Políticos. Montería: Universidad del Sinú.

- ROMERO, Mauricio. 1995. Transformación rural, violencia política y narcotráfico en Córdoba, 1953-1991. *Controversia*, 167: 96-121. Bogotá, CINEP  
2003. *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*. IEPRI, Editorial Planeta. Bogotá.
- ROSS, Michael. Oil, Drugs and Diamonds: the Varying Roles of Natural Resource in Civil War. En: BALLENTINE, Karen y SHERMAN, Jake. The political economy of armed conflict: beyond Greed and Grievance. Boulder: Lynne Rienner, 2003. P. 47-72.
- Vicepresidencia de la República. Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 2003. *Los Derechos Humanos en el Departamento de Córdoba*. Bogotá.  
  
Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual de Paramillo y su entorno. Publicación del Fondo de Inversión para la Paz. Bogotá, 2002.
- VILLARRAGA, Alvaro y Plazas, Nelson (1994) Para Reconstruir los Sueños (Una historia del EPL). Bogotá: Fondo Editorial para la Paz /Progresar/ Fundación Cultura Democrática.
- VILORA DE LA HOZ, Joaquín. 2004. *La economía del departamento de Córdoba: ganadería y minería como sectores clave* en Documentos de trabajo sobre Economía Regional No. 51. Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER). Cartagena.

## Anexo 1

### EVOLUCION E HISTORIA DE CERROMATOSO

#### Hallazgo del yacimiento

El yacimiento de níquel fue descubierto a principios de los años 50 por el geólogo chileno Enrique Hibach quien trabajaba para la compañía petrolera Shell, y por la *Richmond Petroleum Company*, subsidiaria de la Standard Oil of California, SOCAL. Ambas empresas, en búsqueda de petróleo, dieron cuenta de un hallazgo de hierro, razón por la cual esta última empresa presentó al gobierno colombiano un contrato para celebrar la exploración y explotación de hierro<sup>86</sup>. La aclaración sobre la existencia de un yacimiento de níquel en lugar de uno de hierro fue expresada en una nueva propuesta de la Richmond Petroleum Company que derivó en un contrato celebrado en 1963 entre la compañía y el gobierno colombiano. Sin embargo, el hacendado Santiago Gregory había presentado con anterioridad una propuesta al gobierno para la explotación del mismo yacimiento. La existencia de estas dos propuestas, además del contrato entre el gobierno y la Richmond Petroleum Company, que en 1965 cambió su razón social por Chevron Petroleum Company, ocasionó un litigio que se definió a favor de ésta a mediados de 1970<sup>87</sup>.

El gobierno, inmerso en un contexto de expansión industrial en el marco de las políticas cepalinas, otorgó la licencia al consorcio *Chevron-Hanna*, quien fundó en Estados Unidos la Compañía de Níquel Colombiana S.A. –CONICOL- con una subsidiaria en Colombia.

---

<sup>86</sup> MELO, Hector. La historia prohibida de Cerro Matoso. Bogotá: Editorial Latina, 1973.

<sup>87</sup> GANDARA, Hernando. Orígenes del Futuro. Bogotá: Editorial Colina, 1998. En 1964, el Consejo de Estado había escogido a Gregory como primer proponente haciéndole entrega total del área, sin fijar condiciones en cuanto a regalías, explotación del mineral, participación colombiana en el negocio, compromisos de desarrollo regional, entre otros aspectos determinantes para la puesta en marcha de un proyecto de explotación minera. Ese mismo año se supo de la existencia de ocho contratos de explotación minera entre la Richmond y el gobierno que cubrían los terrenos con presencia de níquel. En medio de esta disputa legal, Gregory cedió sus derechos al hacendado Oswaldo López Zapata quien se los trasladó a Kaiser Aluminium Chemical Corporation, a Placer Management Limited, a J.R. Simplot Company y a King Resources de Colombia, empresas competidoras de la Richmond. El Ministro de Minas y Petróleo del momento, Carlos Gustavo Arrieta, revocó la sentencia de mayo de 1964 que favorecía a Gregory y sus cesionarios extranjeros, argumentando que se trató de un error geográfico ya que el terreno propuesto no contaba con presencia de níquel ni de hierro. Quienes han estudiado en detalle el caso afirman que la razón por la cual se tomó esta decisión fue la capacidad de negociación del grupo conformado por la Chevron Petroleum y la Hanna Mining, y la presión de éste sobre el gobierno colombiano NEGRETE. Op.cit. *Montelíbano pasado y presente* P. 82. Ver también: MELO. Op.cit.

CONICOL entró a participar con el 66.6% y a controlar la administración, operación y explotación del yacimiento. El gobierno colombiano participó con el 33.3% a través de la Empresa Colombiana de Níquel –ECONIQUEL- propiedad del Instituto de Fomento Industrial IFI, además, tuvo que aportar capital para poner en marcha el proyecto y gestionar la financiación necesaria para su realización. En 1979 la empresa pertenecía en un 45% a ECONIQUEL-IFI, en un 35% a la *Billiton International Metals BV*, filial del grupo *Shell Royal Dutch*, y en un 20% a CONICOL del grupo *Hanna Mining Co.* En 1997 el gobierno colombiano vendió la participación del IFI a la *Billiton and Training Co.* Actualmente, Cerro Matoso S.A. pertenece en un 94% a la *Billiton and Training Co.*, es una de las diez empresas más grandes de Colombia después de Ecopetrol y Cerrejón, la tercera empresa minera, y la única productora de ferróníquel en el país<sup>88</sup>.

El largo proceso previo a la inauguración de la mina, fue seguido de cerca por terratenientes de la zona, ya que el descubrimiento del yacimiento de níquel implicaba la venta de tierras destinadas a la ganadería extensiva. La respuesta de este grupo fue acumular la mayor cantidad de tierras alrededor del yacimiento para venderlas luego a la compañía por un precio superior al de compra<sup>89</sup>.

Se presentaron desalojos como el caso de la zona de Villa Matoso, en la cual la compañía propuso a sus habitantes la compra de casas y mejoras por debajo del precio comercial, a lo que estos no cedieron. Ante la negativa, un funcionario de CONICOL “los visitaba con frecuencia y hacía formar a los niños, hombres y mujeres en filas para hacer entrega a nombre de la compañía, ron, cerveza, gaseosas y dulces”. Finalmente, se implementó una estrategia de terror psicológico, se le comunicó a las comunidades que la zona padecería cambios drásticos como consecuencia de la explotación del yacimiento, como contaminación del agua y peligro por cercamiento con cables de alta tensión, entre otros efectos adversos. Adicionalmente, se ejerció presión por parte del ejército<sup>90</sup>.

Como parte de su estrategia, la compañía prometió indemnizar por casas y mejoras a precio comercial, ubicar de las familias en el perímetro urbano de Montelbano, construir casas prefabricadas con dotación de servicios, trasladar materiales y enseres hasta el nuevo lugar de residencia y otorgar a los pobladores trabajos en la compañía. En la práctica,

---

<sup>88</sup> DAVILA L. DE GUEVARA. Op.cit.

<sup>89</sup> NEGRETE. Op.cit. *Montelbano pasado y presente.*

<sup>90</sup> Ibid. p 85

“los pobladores debieron destruir sus propias casas como condición previa para recibir el pago, todos los cultivos fueron arrasados por buldóceres de la compañía, el traslado debieron hacerlo ellos mismos por sus propios esfuerzos, el lote escogido en el poblado resultó alejado del perímetro urbano, localizado en un viejo basurero(...), las casas prefabricadas nunca las conocieron, mejoras avaluadas en \$50.000 fueron pagadas a \$8.000 y casas por valor de \$10.000 fueron reconocidas en \$3.000. Las condiciones de vida en este lugar resultaron tan difíciles que varios niños murieron a los pocos días. Otros prefirieron abandonar el lugar y buscar arriendo”<sup>91</sup>.

La inauguración oficial de Cerro Matoso S.A se realizó en 1979, año en el que la empresa comenzó sus trabajos de explotación minera.

Los primeros balances de la mina se hicieron en 1981. Para ese momento otras actividades complementaban el panorama económico de la región: la ganadería extensiva era una de las actividades más importantes, sin embargo no se consolidó como fuente de trabajo para los habitantes de la región pues ocupa poca mano de obra; la producción agrícola presentaba en ese momento inconvenientes como la falta de vías de comunicación, tecnología y comercialización; y la pesca, que se da entre diciembre y abril, ocupaba a una porción importante de pobladores constituyéndose como fuente de trabajo.

### **Etapas de producción - Cerro Matoso S.A.**

Una vez puesta en marcha, la empresa Cerro Matoso S.A comenzó su primera etapa de producción entre 1982 y 1989, y que ha sido considerada como una fase de aprendizaje debido a que fue necesario crear la forma de extracción de un mineral poco común en el mundo y única en el país.

Su creación generó expectativas no sólo para el desarrollo del país si no para el desarrollo subregional dado que se posicionó como la tercera empresa minera del país después de Ecopetrol y El Cerrejón<sup>92</sup>. La prensa especializada dijo en el momento de su creación que Montelíbano recibiría regalías y que estos ingresos, con los años, la

---

<sup>91</sup> NEGRETE. Op.cit. *Montelíbano pasado y presente*. P. 86

<sup>92</sup> “Cerro Matoso, potencial de riqueza y trabajo”. En: *El Espectador*. Viernes, octubre 21 de 1983. Metalexpo-83 3D.

convertirían en una ciudad intermedia moderna<sup>93</sup>. Un año después de su creación se planteó como un nuevo polo de desarrollo en tanto significó una importante inversión en infraestructura vial en la región, así como la posterior generación de ingresos que serían destinados a salud, educación y saneamiento básico<sup>94</sup>.

Dadas las particularidades de la mina y la inexperiencia en la extracción de este mineral, durante este período se presentaron dos accidentes técnicos, uno en 1983 y otro en 1985, hechos que exigieron la suspensión de la operación por más de siete meses. Ambos accidentes se debieron a la dinámica de ensayo y error que atravesó la puesta en funcionamiento de los hornos<sup>95</sup>. Específicamente, el ajuste de las temperaturas a las cuales se debían operar este tipo de máquinas deterioraron los materiales internos de los hornos. A pesar de esto, la tasa de crecimiento del período fue de 4,4% promedio anual, teniendo en cuenta que después de suspender la operación el crecimiento fue de 67% y dos años después era del 13%<sup>96</sup>. Cabe mencionar que para esta primera etapa Cerro Matoso S.A. trabajó a precios considerablemente bajos, de manera que las ganancias por producción apenas cubrían los costos<sup>97</sup>.

Funcionarios de la compañía aseguran que el comienzo de la planta no fue el mejor debido a que además de los problemas técnicos se enfrentó la depresión de los precios del níquel, hecho que lesionó la producción, y que sólo se recuperó hasta 1988: "Teóricamente [la compañía estuvo] quebrada el 84, el 85, [y el] 86 produciendo a pérdida"<sup>98</sup>. Era tal el desbalance de la empresa que según la prensa, en el balance general de 1986 se declararon pérdidas por \$35 mil millones de pesos, y la situación fue catalogada como una "quiebra técnica"<sup>99</sup>.

---

<sup>93</sup> Núñez, José Ramón. "Cerro Matoso. El despegar de la Colombia potencia". En: *Consigna Volumen 6* No.209. Junio 1982 P. 38.

<sup>94</sup> Pinto, Pedro. "Nuevo polo de desarrollo". En: *Síntesis Económica*, Noviembre 14 de 1983. P. 7.

<sup>95</sup> Ver Anexo "La extracción de ferrocromo – el proceso".

<sup>96</sup> VILORA DE LA HOZ, Joaquín. *La economía del departamento de Córdoba: ganadería y minería como sectores clave en Documentos de trabajo sobre Economía Regional No. 51*. Cartagena: Banco de la República, Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), 2004.

<sup>97</sup> Entrevista con Luis Alberto Pongutá. Jefe de la oficina de Asuntos Públicos, Cerro Matoso S.A. Bogotá Septiembre 2007 conocí a este, me pareció que no decía/quería decir nada, sólo propaganda, no le creo nada.

<sup>98</sup> Entrevista con Rodolfo Barón, funcionario de Cerro Matoso S.A. en el área de Recursos Humanos. Montelíbano, 3 de Octubre de 2007.

<sup>99</sup> Matamoros, Martha Elisa. "El incierto futuro de Cerro Matoso". En: *Deslinde* p. 37.

Análisis económicos de la época muestran la incertidumbre en torno a la bondad del proyecto niquelero<sup>100</sup>. Se denunció la baja utilización de la capacidad instalada para 1982 al tiempo que se buscaban nuevas inversiones para solucionar problemas técnicos. Así también se resaltó la ausencia de la Hanna Mning que funcionaba como asesora técnica del proyecto.

El año crítico de la empresa en cuanto a producción fue 1986. Este hecho fue registrado por la prensa. Se afirmó que “a finales de 1986 la situación de Cerro Matoso era muy complicada. Estaba al borde de la disolución”<sup>101</sup>. La razón fue la caída de los precios del níquel por un lado y la capacidad de producción de la planta, por otro. Ante esto “se pensó en la instalación de un segundo horno [eléctrico] con el fin de disminuir los costos unitarios de producción”<sup>102</sup>. La idea no pudo llevarse a cabo pues la empresa estaba en proceso de refinanciación de su deuda y tenía poca capacidad de pago dados sus ingresos.

En 1986 el gobierno financió a la empresa con US\$4.2 millones mediante la figura de préstamo a través del Fondo de Monedas Extranjeras (FODEX); también lo hizo en febrero de 1987, esta vez por valor de US\$8 millones, ambos préstamos para cubrir la deuda de este proyecto al Banco Mundial. Luego de esto se pactó con la banca comercial extranjera la refinanciación de la deuda, hecho que dejó a CMSA en manos de los acreedores<sup>103</sup>.

Las finanzas de la compañía se recuperaron en 1988 cuando la libra de níquel alcanzó en promedio los 5.6 dólares<sup>104</sup>, 4 dólares más que el año inmediatamente anterior. Este hecho se debió a “el mayor consumo de acero inoxidable, y por lo tanto de níquel o de ferroníquel”<sup>105</sup>, lo que se tradujo en “las condiciones de oferta y demanda registradas en la Bolsa de Metales de Londres” de donde Colombia toma las cotizaciones del metal<sup>106</sup>.

Las ganancias registradas desde 1988 hasta el cierre del primer semestre de 1990 le permitieron a la empresa cancelar el 68% de la deuda al Banco de la República que había

---

<sup>100</sup> Ibíd. Matamoros. P. 34

<sup>101</sup> SALAZAR, Mónica. “Cerro Matoso. Tocó fondo y lista para zarpar” Síntesis Económica Vol.v12 No. 605 Marzo 28 de 1988. Páginas 12-20.

<sup>102</sup> GANDARA. Op.cit. p 75

<sup>103</sup> Salazar. Op.cit. Matamoros. P 38.

<sup>104</sup> GANDARA. Op.cit. p 88

<sup>105</sup> Salazar. Op.cit. Página 18.

<sup>106</sup> “Bonanza del níquel”. En: *El Tiempo*. Jueves 23 de agosto de 1990. P. 10-A

asumido los compromisos con el Banco Mundial. En 1988 el valor de la deuda externa de CMSA se calculó en US\$347. 7 millones<sup>107</sup>.

Este giro en el balance de Cerro Matoso revitalizó la idea de la construcción de un segundo horno, proyecto que generó expectativas muy altas entre los políticos de la región, tanto así que el gobernador de Córdoba, José Gabriel Amín Manzur, solicitó para un proyecto departamental un millón de dólares como anticipo de regalías por la producción futura resultado de la construcción del segundo horno<sup>108</sup>.

La segunda etapa se desarrolló entre 1990 y 1997, y en ella se generó una mayor estabilidad en la producción y un mejor conocimiento del mercado internacional. El crecimiento fue de 4.6% anual.

En 1991, momento en el cual el IFI era dueño del 47.23% de la empresa, el gobierno planteó la posibilidad de vender parte del ferroníquel producido por Cerro Matoso por su propia cuenta justificado en el hecho de que después de once años de experiencia el país había aprendido cómo hacerlo y el seis por ciento sobre el total de las ventas que ganaba la Billiton era muy alto<sup>109</sup>. Al mismo tiempo manifestó el propósito de invertir en la construcción del segundo horno.

La discusión continuaba en 1992 y los intereses de las élites regionales se hicieron sentir cuando se discutió el tema en la Comisión V del Senado, discusión promovida por el senador cordobés Salomón Nader, perteneciente a una de las familias tradicionales de la región. En el debate cuestionó la construcción del segundo horno, la privatización y la venta de níquel por parte del Estado. Los intereses de la clase política cordobesa, representados por el senador Nader se apuntaban a un mayor poder por parte de Estado, específicamente por la autoridad regional por lo cual se discutió una ley de regalías según la cual el departamento de Córdoba asumiera el ocho por ciento de las acciones de la compañía<sup>110</sup>.

Producto de las diferencias al interior del gobierno sobre el tema de regalías y contribuciones, las presiones políticas y los cambios en las reglas del juego, los socios de

---

<sup>107</sup> *Ibíd.* Bonanza del Níquel.

<sup>108</sup> GANDARA. *Op.cit.* p 75

<sup>109</sup> “Gobierno quiere más poder en Cerromatoso”. *En: El Tiempo.* 28 de marzo de 1991.

<sup>110</sup> “Aplazada la venta de Cerro Matoso”. *En: El Tiempo.* 26 de agosto de 1992.



Cerro Matoso decidieron congelar la inversión en el segundo horno en enero de 1993<sup>111</sup>. La prensa menciona existencia de una fuerte oposición frente a la construcción de un nuevo horno por parte de distintos sectores de Córdoba liderados por el senador Nader y el sindicato de trabajadores de la compañía, Sintracerrromatoso, argumentando el agotamiento de las reservas de ferroníquel. Además, Nader manifestó que sólo apoyaría la privatización en el caso en que se otorgara el diez por ciento de las acciones de la empresa al departamento donde está ubicada la mina<sup>112</sup>. Sectores de la mencionaron la influencia del senador Nader en el Ministro de Minas y Energía del momento, Guido Nule Amín, para dilatar la discusión frente a la ampliación de Cerro Matoso. Esta decisión ya había sido estudiada y aprobada por ex ministro de esta cartera Juan Camilo Restrepo, sólo faltaba la firma del ministro entrante, Nule Amín<sup>113</sup>.

Las redes de poder regional juegan un papel importante dentro de esta negociación. El periódico *El Tiempo* del 26 de febrero de 1993 publica un artículo donde se manifiesta que

(...) detrás de estos sucesivos aplazamientos, se mueven los hilos de la politiquería regional. El senador por Córdoba, Salomón Nader, próximo amigo del ministro y cacique de la región, es el suegro del Secretario General del Ministerio de Minas y Energía, Rafael Anaya. El senador tiene un sólido apetito clientelista. Y Cerromatoso, en este sentido, es para él una gallina suculenta a la cual, hasta el momento, no ha logrado sacarle mayor tajada. No tiene cuotas políticas entre los 700 trabajadores de la compañía, que han sido seleccionados de acuerdo con las normas rigurosas de una empresa privada. El 60 por ciento de las regalías se quedan en la CVS, cuyo gerente es el hermano de su rival político Juan Manuel López. El senador quiere caerle a Cerromatoso. Es algo así como una piedra en su zapato (...)<sup>114</sup>

En medio de la discusión se produjo el asesinato del ex Ministro de Salud Amaury García Burgos, dos veces gobernador del departamento de Córdoba. La prensa anunció su muerte con el siguiente titular “Disputa por regalías, causa del crimen de Amaury García”.

En el artículo, del 10 de marzo de 1993, se menciona que su muerte se produjo luego de una reunión en Cerro Matoso, y una visita a Buenavista, municipio cercano a Montelíbano,

---

<sup>111</sup> “Congelan ampliación en Cerro Matoso S.A.” *En: El Tiempo*. 28 de enero de 1993.

<sup>112</sup> “Paralizan ensanche de planta de níquel”. *En: El Tiempo*. 16 de enero de 1993.

<sup>113</sup> “Cerromatoso”. *En: El Tiempo*. 7 de marzo de 1993.

<sup>114</sup> “Compadrazgos peligrosos”. *En: El Tiempo*. 26 de febrero de 1993.

donde se entrevistó con el alcalde. En un artículo del 26 se hace la siguiente pregunta ¿qué se han hecho los 48 millones de dólares que ha recibido Córdoba por concepto de regalías? La respuesta que se da está directamente relacionada con el asesinato del líder mencionado: “Alguien se interesó en este tema. Decidí investigarlo: el doctor Amaury García Burgos. Fue asesinado, y su familia y sus amigos no dudan de que fue como consecuencia de esta investigación emprendida por él”<sup>115</sup>.

La compañía se pronunció sobre el hecho negando la existencia de discrepancias con el ex ministro García Burgos sobre las regalías generadas por la empresa <sup>116</sup>.

Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) en el cual se generó un acelerado proceso de privatización que derivó en la venta de 28 empresas del Estado<sup>117</sup>, se tomó la decisión de privatizar Cerro Matoso S.A. Esta decisión también estuvo relacionada con que las proyecciones indicaban que las reservas de Ferroníquel se agotarían en 2005 y que los precios no cambiarían su tendencia a la baja, de manera que no se suplían las expectativas de utilidades del Estado. La venta se realizó en 1997 a la multinacional surafricana Gencor, del grupo Billiton <sup>118</sup>.

La clase política regional se opuso a la venta de Cerromatoso y antes de que esta se hiciera efectiva convocó a dirigentes cívicos, sindicales, religiosos, comerciales y comunales de los municipios de la región del San Jorge. Argumentaron que la subregión había sido totalmente abandonada por las autoridades nacionales y regionales antes de la construcción del complejo niquelero <sup>119</sup>. Pidieron la revisión de los contratos de concesión y comercialización, y de la Ley de Regalías propuesta por Nader <sup>120</sup>.

La tercera etapa se caracteriza por la ampliación de la capacidad instalada. Comienza en el año 2000 cuando la empresa invirtió cerca de 353 millones de dólares en un proyecto de expansión que consistió en la construcción de una segunda línea de producción, no sólo de un segundo horno como se había discutido hasta el momento, sino con el montaje de dos apiladores del mineral, un secador, un horno calcinador y otros equipos

---

<sup>115</sup> “El Emplazamiento”. En: *El Tiempo*. 26 de marzo de 1993.

<sup>116</sup> “No hubo discrepancias”. En: *El Tiempo*. 11 de marzo de 1993.

<sup>117</sup> “Verborrea electorera” En: Revista Dinero. Enero 7 de 1995. Disponible en [http://www.dinero.com/wf\\_InfoArticulo.aspx?IdArt=14546](http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=14546)

<sup>118</sup> “Gobierno vendió Cerro Matoso”. En: *El Tiempo*. 19 de febrero de 1997.

<sup>119</sup> “En Córdoba se oponen a venta del complejo niquelero de Cerromatoso”. En: *El Tiempo*. 6 de noviembre de 1996.

<sup>120</sup> “Gremios protestan por venta de Cerromatoso”. En: *El Tiempo*. 6 de noviembre de 1996.

auxiliares. En 2001 se obtuvo la primera cochada<sup>121</sup> del mineral producto de la segunda línea. La tasa de crecimiento en esta etapa fue de 11.2% anual. Los niveles de producción alcanzados en esta tercera etapa convirtieron a Colombia en el tercer productor de Ferroníquel de América Latina, después de Cuba y República Dominicana<sup>122</sup>.

La ampliación de la empresa fue registrada por los periódicos nacionales. En el artículo “Cerro Matoso se fortalece” publicado por El Tiempo se hace énfasis en el empleo generado por la compañía y en la vinculación de personal de la subregión del San Jorge<sup>123</sup>.

Desde 2006, según lo registra el periódico regional, la empresa está explorando la posibilidad de nuevos hallazgos del mineral en territorios cercanos a la mina actual, “son más de 50 mil hectáreas en las que Cerro Matoso buscará más reservas niqueleras, que le permitirán al departamento seguir obteniendo recursos por concepto de regalías”<sup>124</sup>.

---

<sup>121</sup> Un lote o cochada de un combustible es una cantidad de este que tiene características homogéneas y que cumple todos los requisitos para ser certificado como producto para entrega al público consumidor. Fuente: [www.minminas.gov.co](http://www.minminas.gov.co)

<sup>122</sup> Las reservas más grandes de níquel (medidas en toneladas metálicas) en el mundo, se encuentran en Cuba Nueva Calcedonia, Canadá, Indonesia, Australia, Filipinas, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y Brasil. MELO. Op.cit.

<sup>123</sup> “Cerro Matoso se fortalece”. En: El Tiempo. 23 de Julio de 2001.

<sup>124</sup> “Cerro Matoso ampliará exploración”. En: El Meridiano. 13 de noviembre de 2006.

## Anexo 2

### EL SINDICATO NIQUELERO

Cerro Matoso cuenta con un sindicato, Sintracerrromatoso, de aproximadamente 25 años de funcionamiento. Se establece en el año 81 cuando, después de un intento fallido por agremiarse, “un pequeño número de trabajadores, no más de 50 no menos de 30, todos pobladores del municipio de Montelíbano, se organizan para hacerse representar ante la empresa”<sup>125</sup>. Los trabajadores que inicialmente intentaron conformar el sindicato fueron despedidos, sin embargo, el sindicato ha sido mayoritario y hoy cuenta con aproximadamente el 70% de los trabajadores afiliados. En la última década, el porcentaje de trabajadores sindicalizados ha disminuido debido a los cambios en los modelos de contratación que hacen que el número de trabajadores contratistas aumente, llegando a ser tres veces el número de trabajadores a término indefinido<sup>126</sup>.

En la historia del sindicato se han presentado dos huelgas. Según el asesor de Sintracerrromatoso durante toda su actividad sindical, Iván Toro, la primera huelga, que duró cinco días, respondió al ingreso de un grupo mayoritario de dirigentes sindicales “que no eran muy conscientes, ni eran muy expertos y sin mayor asesoría en un proceso decidieron presentar un pliego de peticiones a la empresa que era absolutamente exagerado (...) pedían por ejemplo que los salarios de ellos se nivelaran con los de los trabajadores de esa misma empresa en el exterior, porque en ese momento, la empresa fue vendida por el Estado”. Adicionalmente, los trabajadores sindicalizados “estaban súper radicales” y “la empresa en esos días se puso intransigente” lo que generó una huelga que se hubiera podido evitar si las partes hubieran cedido<sup>127</sup>.

La segunda huelga tuvo como raíz los cambios en los modelos de contratación. En los últimos seis años se ha presentado un proceso de contratación a término fijo a través de contratistas, proceso generalizado en la estructura económica nacional, “entonces fue creciendo la masa de trabajadores que no puede ser del sindicato y a la que no se le aplica la convención colectiva”. Luego de 33 días de paro, en la que según el vocero de la compañía y representante de las directivas de BHP Billinton la empresa perdió 5 mil

---

<sup>125</sup> Entrevista con líder sindical. Montelíbano, octubre de 2007.

<sup>126</sup> Entrevista con líder sindical. Montelíbano, octubre de 2007.

<sup>127</sup> Entrevista con asesor sindical. Bogotá, febrero de 2008.

millones de pesos por día, se pactó inicialmente la vinculación de 35 funcionarios que en la actualidad trabajan a través de contratistas<sup>128</sup>.

Las particularidades de Cerro Matoso respecto a la sindicalización merecen especial atención en tanto desde la literatura se plantea que donde se prohíbe o reprime la sindicalización de los trabajadores, se da una mayor tendencia a la radicalización de éstos y al reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Respecto a esta hipótesis es posible ver que el comportamiento se cumple en la etapa inicial del sindicato, cuyos primeros esfuerzos de sindicalización fueron reprimidos por la empresa y luego permeados por la guerrilla del EPL. Sin embargo, las dinámicas de conflicto armado en ese momento no parecieron tener mayor significado en la lucha sindical, este elemento apareció como una más de las herramientas utilizadas por la guerrilla para la generación de una base social y como parte de la utilización de “todas las formas de lucha”<sup>129</sup>.

En el tránsito entre la desmovilización del EPL y surgimiento de las autodefensas el sindicato parece haber sido neutralizado por la amenaza de los grupos paramilitares, hecho que derivó en una convivencia inducida por estos grupos y el enfoque de la lucha sindical específicamente en las condiciones laborales de la mina. El *modus operandi* de las autodefensas tuvo un especial énfasis en el silenciamiento de sindicalistas y profesores entre otros grupos considerados como de la oposición.

En contraste con sindicatos como Sintrabanano y Sintrainagro en el Urabá<sup>130</sup>, la ausencia de homicidios a sindicalistas de la compañía puede estar relacionado también con una característica de la mano de obra que extrae ferróníquel, específicamente con su procedencia geográfica. Sólo el 7% de los trabajadores son de Montelíbano, y aunque un gran número de trabajadores del porcentaje restante son de la Costa Atlántica, este pequeño número de montelibaneses genera desapego a luchas regionales, y aún más de las luchas municipales.

El caso de Sintracerrromatoso resulta llamativo en tanto se trata de un sindicato mayoritario en un contexto de conflicto armado con presencia paramilitar. Se esperaría que ante el discurso paramilitar de una guerrilla que se nutre de su base social, el sindicato hubiera perdido adeptos. Esto no ocurrió en el caso de Cerro Matoso.

---

<sup>128</sup> Entrevista con asesor sindical. Bogotá, febrero de 2008.

<sup>129</sup> VILLARRAGA, Alvaro y Plazas, Nelson Para Reconstruir los Sueños (Una historia del EPL). Bogotá Fondo Editorial para la Paz /Progresar/ Fundación Cultura Democrática, 1994.

<sup>130</sup> Entrevista con ex jefe paramilitar. Medellín, 11 de abril de 2009.

Para entender lo anterior resulta necesario mencionar que al interior del sindicato se observaron dos corrientes de influencia ideológica durante las dos primeras décadas de funcionamiento: el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario<sup>131</sup> -MOIR- y simpatizantes del EPL. Este grupo adelantó una labor de propaganda y de proselitismo político en la región que logró la simpatía de trabajadores de la mina. Cabe recordar que en los años 80 la actividad del EPL, actor armado que nació y se transformó en la región del Alto Sinú, estaba sustentada en la actividad sindical. En ese momento este grupo armado ilegal estaba enfocado en las tareas educativas, “se creó una ONG dedicada a la educación política de los sindicatos, a la asesoría laboral y la investigación”<sup>132</sup>

En este contexto, miembros del EPL realizaron acciones de intimidación entre quienes no eran simpatizantes para conseguir la dirección del sindicato. Un asesor de Sintracerrromatoso narra la historia:

“Una noche, en la madrugada, a nosotros nos llamaron los compañeros a Bogotá, nos dijeron que tenían un problema, dijeron que ellos habían sido visitados esa noche en sus casas por gente armada que había ido a presionarlos para que votaran por uno de los amigos del EPL, que qué hacían, entonces lo que yo les dije fue que votaran, ya con el chantaje, con la amenaza de las armas nosotros no íbamos a arriesgarlos a ellos por un cargo sindical, que votaran por el que les dijeran para evitar un conflicto mayor”<sup>133</sup>

Desde el sindicato la presencia de las autodefensas se percibió como “pasiva, ahí estaban pero no se mostraban, no se hacían muy visibles”<sup>134</sup>.

---

<sup>131</sup> Para mayor información consultar <http://www.moir.org.co/-MOIR-.html>

<sup>132</sup> VILLARRAGA. Op.cit. Página 160.

<sup>133</sup> Entrevista con asesor sindical. Bogotá: febrero de 2008.

<sup>134</sup> Entrevista con asesor sindical. Bogotá: febrero de 2008.

### Anexo 3

#### Correlaciones: homicidios en Montelíbano vs. Precios del níquel

Se realizó un ejercicio estadístico con el fin de determinar la presencia de una relación lineal entre la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el municipio de Montelíbano y los precios del níquel. Con base en los resultados mostrados en los cuadros 2 y 3 del anexo, se concluyó que no hay evidencia estadística para afirmar la existencia de una correlación positiva.

Cuadro No. 1

Estadísticos descriptivos			
	Media	Desviación típica	N
Precios	4,096331405	2,150135587	17
Homicidios	3,433514976	0,60474648	16

Cuadro No. 2

Correlaciones			
		Precios	Homicidios
Precios	Correlación de Pearson	1	0,33177753
	Sig. (bilateral)		0,20933695
	N	17	16
Homicidios	Correlación de Pearson	0,331777534	1
	Sig. (bilateral)	0,209336948	
	N	16	16

Cuadro No. 3

Correlaciones				
			Precios	Homicidios
Tau b de Kendall	Precios	Coeficiente de correlación	1	0,10878756
		Sig. (bilateral)	.	0,55795157
		N	17	16
	Homicidios	Coeficiente de correlación	0,108788	1
		Sig. (bilateral)	0,557952	.
		N	16	16
Rho de Spearman	Precios	Coeficiente de correlación	1	0,16041211
		Sig. (bilateral)	.	0,5528709
		N	17	16
	Homicidios	Coeficiente de correlación	0,160412	1
		Sig. (bilateral)	0,552871	.
		N	16	16